

SESIÓN ORDINARIA
H. LXVI LEGISLATURA DEL ESTADO
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

PRESIDENTE: SESIÓN ORDINARIA DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO, TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 03 DE MAYO DE 2016.

EN LA CIUDAD DE VICTORIA DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA (03) TRES DEL MES DE MAYO DEL AÑO (2016) DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDOS LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA LOCAL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO LUIS FERNANDO SOTO JACQUEZ, ASISTIDO DE LOS DIPUTADOS SECRETARIOS ALICIA GARCÍA VALENZUELA Y PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO, DIO PRINCIPIO LA SESIÓN CON LA INSTRUCCIÓN A LA OFICIALÍA MAYOR QUE ABRA EL SISTEMA DE REGISTRO HASTA POR UN MINUTO, PARA QUE LOS DIPUTADOS INSCRIBAN SU ASISTENCIA, REGISTRÁNDOSE DE "PRESENTE" LOS SIGUIENTES: DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN VILLALOBOS VALENZUELA, DIPUTADO ARTURO KAMPFNER DÍAZ, DIPUTADO LUIS IVÁN GURROLA VEGA, DIPUTADO EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA, DIPUTADO LUIS FERNANDO SOTO JACQUEZ, DIPUTADA BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ, DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX, DIPUTADO OCTAVIO CARRETE CARRETE, DIPUTADO JULIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ, DIPUTADO JUAN CUITLÁHUAC ÁVALOS MÉNDEZ, DIPUTADA ANAVEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIPUTADO MARTÍN HERNÁNDEZ ORTIZ, DIPUTADO PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO, DIPUTADO LÁZARO HERRADA GONZÁLEZ, DIPUTADO MARCO AURELIO ROSALES SARACCO, DIPUTADO JOSÉ MANUEL GALLEGOS RANGEL,



H. Congreso del Estado
de Durango

LXVI LEGISLATURA 2013-2016

2

OFICIALÍA MAYOR
PROCESO LEGISLATIVO
SESIÓN ORDINARIA
DE LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
03 DE MAYO DE 2016
(10:00) HORAS

DIPUTADO CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA, DIPUTADO FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ VÁZQUEZ, DIPUTADO EUSEBIO CEPEDA SOLÍS, DIPUTADO FELIPE DE JESÚS ENRÍQUEZ HERRERA, DIPUTADO FELIPE FRANCISCO AGUILAR OVIEDO, DIPUTADA ALICIA GARCÍA VALENZUELA, DIPUTADO JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ, DIPUTADO FELIPE MERAZ SILVA, DIPUTADO ROSAURO MEZA SIFUENTES, DIPUTADO JUAN QUIÑÓNEZ RUIZ, DIPUTADO CARLOS MANUEL RUIZ VALDEZ, DIPUTADO JULIÁN SALVADOR REYES Y DIPUTADO ISRAEL SOTO PEÑA.-

PRESIDENTE: SE CIERRA EL SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA, Y SE INSTRUYE A LA DIPUTADA SECRETARIA ALICIA GARCÍA VALENZUELA, PARA QUE VERIFIQUE EL RESULTADO E INFORME SI EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA INICIAR LA SESIÓN.

Nombre	Registro
JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX	10:22:00
FELIPE DE JESÚS ENRIQUEZ HERRERA	10:31:32
LUIS FERNANDO SOTO JACQUEZ	10:31:23
ROSAURO MEZA SIFUENTES	10:31:22
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ VÁZQUEZ	10:31:21
EUSEBIO CEPEDA SOLIS	10:31:54
JULIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ	JUSTIFICADA
FELIPE FRANCISCO AGUILAR OVIEDO	JUSTIFICADA
JOSÉ MANUEL GALLEGOS RANGEL	10:32:41
JUAN CUITLÁHUAC AVALOS MÉNDEZ	10:31:33
MARÍA DEL CARMEN VILLALOBOS V	10:31:51
EDUARDO SOLIS NOGUEIRA	10:31:48
BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ	10:31:22
ANAHEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ	10:33:23
JUAN QUIÑONES RUIZ	10:33:51
MARTÍN HERNÁNDEZ ORTÍZ	10:32:46
PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO	10:31:32
ARTURO KAMPFNER DÍAZ	10:31:45
CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA	10:31:30
LUIS IVÁN GURROLA VEGA	10:34:57
OCTAVIO CARRETE CARRETE	10:32:28
ALICIA GARCIA VALENZUELA	10:31:56
JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ	10:31:56



H. Congreso del Estado
de Durango

LXVI LEGISLATURA 2013-2016

3

OFICIALÍA MAYOR
PROCESO LEGISLATIVO
SESIÓN ORDINARIA
DE LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
03 DE MAYO DE 2016
(10:00) HORAS

JULIÁN SALVADOR REYES	10:31:29
ISRAEL SOTO PEÑA	10:22:00
LÁZARO HERRADA GONZÁLEZ	10:32:00

CARLOS MANUEL RUIZ VALDEZ	10:31:46
MARCO AURELIO ROSALES SARACCO	10:31:24
FELIPE MERAZ SILVA	10:31:28

DIPUTADA ALICIA GARCÍA VALENZUELA: CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE HAY VEINTISÉIS DIPUTADOS LE INFORMO DIPUTADO PRESIDENTE QUE SE RECIBIÓ TARJETA DE LOS CC. DIPUTADOS JULIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ Y FELIPE FRANCISCO AGUILAR OVIEDO, EN LA CUAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN DÉCIMO TERCERA, DE LA “LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO”, SOLICITAN A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA QUE LES SEA JUSTIFICADA SU INASISTENCIA, HAY QUÓRUM SEÑOR PRESIDENTE.

PRESIDENTE: HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN.

PRESIDENTE: INFORMO A LA ASAMBLEA QUE LOS ASUNTOS A TRATAR EN ESTA SESIÓN, SE DAN A CONOCER MEDIANTE LA GACETA PARLAMENTARIA QUE PUEDE SER CONSULTADA DESDE SUS LUGARES, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARLAMENTARIA.

PRESIDENTE: ESTA PRESIDENCIA SOLICITA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2016.

PRESIDENTE: SE SOMETE A VOTACIÓN PARA SU APROBACIÓN EN FORMA ECONÓMICA, MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARLAMENTARIA, PARA LO CUAL LAS Y LOS DIPUTADOS TIENEN HASTA UN MINUTO PARA REGISTRAR SU VOTO.

PRESIDENTE: SE CIERRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE VOTACIÓN, Y SE INSTRUYE AL DIPUTADO SECRETARIO PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO, PARA QUE DE A CONOCER EL SENTIDO DE LOS VOTOS A ESTA PRESIDENCIA.

Diputado	Sentido
JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX	A favor
FELIPE DE JESÚS ENRIQUEZ HERRERA	A favor
LUIS FERNANDO SOTO JACQUEZ	A favor
ROSAURO MEZA SIFUENTES	A favor
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ VÁZQUEZ	A favor
EUSEBIO CEPEDA SOLIS	A favor
JULIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ	
FELIPE FRANCISCO AGUILAR OVIEDO	
JOSÉ MANUEL GALLEGOS RANGEL	A favor
JUAN CUITLÁHUAC AVALOS MÉNDEZ	A favor
MARÍA DEL CARMEN VILLALOBOS V	A favor
EDUARDO SOLIS NOGUEIRA	A favor
BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ	A favor
ANAHEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ	A favor
JUAN QUIÑONES RUIZ	A favor
MARTÍN HERNÁNDEZ ORTÍZ	A favor
PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO	A favor
ARTURO KAMPFNER DÍAZ	A favor
CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA	
LUIS IVÁN GURROLA VEGA	A favor
OCTAVIO CARRETE CARRETE	A favor
ALICIA GARCIA VALENZUELA	A favor
JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ	A favor
JULIÁN SALVADOR REYES	A favor
ISRAEL SOTO PEÑA	
LÁZARO HERRADA GONZÁLEZ	A favor
CARLOS MANUEL RUIZ VALDEZ	En contra
MARCO AURELIO ROSALES SARACCO	A favor
FELIPE MERAZ SILVA	A favor

DIPUTADO PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO: CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA, LE INFORMO QUE SON VEINTICUATRO VOTOS A FAVOR, UNO EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES.

PRESIDENTE: SE APRUEBA LA SOLICITUD DE LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PRESIDENTE: PREGUNTO A LAS Y LOS SEÑORES DIPUTADOS SI DESEAN HACER ALGUNA ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN AL ACTA CUYA LECTURA SE HAN DISPENSADO.

PRESIDENTE: AL NO HABER INTERVENCIONES SE SOMETE A VOTACIÓN PARA SU APROBACIÓN EN FORMA ECONÓMICA EL ACTA DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2016, MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARLAMENTARIA, PARA LO CUAL LOS DIPUTADOS TIENEN HASTA UN MINUTO PARA REGISTRAR SU VOTO.

PRESIDENTE: SE CIERRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE VOTACIÓN, Y SE INSTRUYE A LA DIPUTADA SECRETARIA ALICIA GARCÍA VALENZUELA, PARA QUE DE A CONOCER EL SENTIDO DE LOS VOTOS A ESTA PRESIDENCIA.

Diputado	Sentido
JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX	A favor
FELIPE DE JESÚS ENRIQUEZ HERRERA	A favor
LUIS FERNANDO SOTO JACQUEZ	A favor
ROSAURO MEZA SIFUENTES	
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ VÁZQUEZ	A favor
EUSEBIO CEPEDA SOLIS	A favor
JULIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ	
FELIPE FRANCISCO AGUILAR OVIEDO	



H. Congreso del Estado
de Durango

LXVI LEGISLATURA 2013-2016

6

OFICIALÍA MAYOR
PROCESO LEGISLATIVO
SESIÓN ORDINARIA
DE LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
03 DE MAYO DE 2016
(10:00) HORAS

JOSÉ MANUEL GALLEGOS RANGEL	A favor
JUAN CUITLÁHUAC AVALOS MÉNDEZ	A favor
MARÍA DEL CARMEN VILLALOBOS V	A favor
EDUARDO SOLIS NOGUEIRA	
BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ	A favor
ANAHEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ	A favor
JUAN QUIÑONES RUIZ	A favor
MARTÍN HERNÁNDEZ ORTÍZ	A favor
PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO	A favor
ARTURO KAMPFNER DÍAZ	A favor
CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA	
LUIS IVÁN GURROLA VEGA	A favor
OCTAVIO CARRETE CARRETE	A favor
ALICIA GARCIA VALENZUELA	A favor
JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ	A favor
JULIÁN SALVADOR REYES	A favor
ISRAEL SOTO PEÑA	
LÁZARO HERRADA GONZÁLEZ	A favor
CARLOS MANUEL RUIZ VALDEZ	Abstencion
MARCO AURELIO ROSALES SARACCO	A favor
FELIPE MERAZ SILVA	A favor

DIPUTADA ALICIA GARCÍA VALENZUELA: CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE, CON VEINTIDÓS VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y UNA ABSTENCIÓN, ES CUANTO.

PRESIDENTE: SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2016

PRESIDENTE: SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO, DAR LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA.

DIPUTADO PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO: CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA, LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA

PARA DAR CUENTA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. LXVI
LEGISLATURA DEL ESTADO 03 DE MAYO DE 2016.

OFICIOS Nos. 231, 631, 670, 671.- ENVIADOS POR LOS H. CONGRESOS DE
LOS ESTADOS DE NAYARIT, PUEBLA Y QUINTANA ROO, COMUNICANDO
ELECCIÓN DE SU MESA DIRECTIVA, QUE FUNGIRÁ DURANTE EL
PRESENTE MES.

PRESIDENTE: ENTERADOS.

OFICIO No. SELAP/300/739/16.- ENVIADO POR EL SUBSECRETARIO DE
ENLACE LEGISLATIVOS Y ACUERDOS POLÍTICOS DE LA SECRETARIA DE
GOBERNACIÓN, DANDO CONTESTACIÓN A PUNTO DE ACUERDO DE
FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2015.

PRESIDENTE: A SU EXPEDIENTE.

DIPUTADO PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO: ES CUANTO PRESIDENTE.

PRESIDENTE: LA DIPUTADA SECRETARIA ALICIA GARCÍA VALENZUELA,
DARA LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN, QUE CONTIENE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

DIPUTADA ALICIA GARCÍA VALENZUELA: HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación, le fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, cuatro iniciativas: la primera en fecha 12 de mayo de 2015, presentada por los **CC. Diputados CARLOS EMILIO CONTRERAS GALINDO, MARCO AURELIO ROSALES SARACCO, FELIPE MERAZ SILVA y JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ**, integrantes de esta Sexagésima Sexta Legislatura, que contiene **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Durango**; la segunda en



fecha 16 de febrero de 2016, presentada por los **CC. Diputados JUAN QUIÑONEZ RUIZ y CARLOS MANUEL RUIZ VALDEZ**, integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional de la presente Legislatura, que contiene reformas y adiciones a la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango**; la tercera en fecha 15 de marzo de 2016, presentada por el **C. C.P. JORGE HERRERA CALDERA, Gobernador del Estado de Durango**, que contiene **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado** y la Cuarta presentada en fecha 30 de marzo de 2016, por los comisionados y comisionada integrantes del **CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DURANGUENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (IDAIP)**, que contiene **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango**; por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 93, y los diversos artículos 121, 176, 177, 180, 181, 182 y 183 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes, descripción de la iniciativa y las consideraciones que motivan la formulación del presente dictamen.

ANTECEDENTES

1.- El 7 de febrero de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a diversos artículos de la Constitución Federal en materia de transparencia, los puntos relevantes de dicha reforma consistieron en:

- a).- Ampliar el espectro de sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información, por ejemplo, los sindicatos;
- b).- Se facultó al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de Gobierno;
- c).- Faculta a los organismos garantes de acceso a la información (tanto al Federal como a los de las Entidades Federativas), a promover controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad contra leyes que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales.
- d).- Obliga a que las Constituciones de los Estados establezcan organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6 de la Constitución y la Ley General que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

2.- Posteriormente con fecha 4 de mayo de 2015, el Congreso de la Unión expidió la **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, precisando en su Artículo Quinto Transitorio, que las legislaturas estatales tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor de dicha ley, para armonizar las leyes que correspondan, respetando los lineamientos de la misma Ley General.

3.- La Ley General establece, entre otros, los siguientes objetivos:

- a).- Distribuir competencias entre los Organismos Garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información;
- b).- Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información;
- c).- Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente;
- d).- Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia; y
- e).- Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

De igual manera la Ley General establece los principios que deben tener los Órganos Garantes de Transparencia y Acceso a la Información (IDAIP), siendo estos los siguientes: Certeza; Eficacia; Imparcialidad; Independencia; Legalidad; Máxima publicidad; Objetividad; Profesionalismo y Transparencia.

De manera general esta Ley contiene los siguientes puntos a destacar:

- a).- Los Organismos garantes son autónomos, especializados, independientes, imparciales y colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna;
- b).- En las leyes de las Entidades Federativas, se determinará lo relativo a la estructura y funciones de los Organismos Garantes, así como la integración, duración del cargo, requisitos, procedimiento de selección, régimen de incompatibilidades, excusas, renunciaciones, licencias y suplencias de los integrantes de dichos Organismos garantes;
- c).- Los Congresos Locales, a fin de garantizar la integración colegiada y autónoma de los Organismos Garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus integrantes se denominarán Comisionados.

Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de género.

La duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía.

En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad.

d).- Se señala que los Organismos garantes contarán con un Consejo Consultivo, que estará integrado por consejeros que serán honoríficos y por un plazo que no exceda a siete años.
Las leyes locales contemplarán lo relativo a la integración, funcionamiento, procedimientos transparentes de designación, temporalidad en el cargo y su renovación.
En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de personas con experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia.

SITUACIÓN LEGISLATIVA EN NUESTRA ENTIDAD

Ahora bien, en nuestra Entidad se han presentado 4 iniciativas de armonización de nuestra normatividad de transparencia con la Ley General de la materia, las cuales presentamos en orden cronológico y haciendo un breve resumen de las mismas:

a).- Iniciativa de los diputados Carlos Emilio Contreras Galindo, Marco Aurelio Rosales Saracco, Felipe Meraz Silva y José Alfredo Martínez Núñez, presentada el día 13 de mayo de 2015.

Proponen la expedición de una nueva Ley e identifica como sujetos obligados, a las autoridades, órganos y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejecute recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal.

El Instituto será un organismo autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía técnica y de gestión, tendrá por facultades las de imponer las medidas de apremio y sanciones, recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

Con la creación de las unidades y comités de transparencia de los sujetos obligados se facilitará el acceso a la información para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, auxiliar a los particulares, realizar trámites internos y llevar un registro de solicitudes, respuestas y resultados.

Se propone, que las resoluciones del Instituto deban establecer requerimientos, recomendaciones u observaciones correspondientes, así como los términos y plazos que los sujetos obligados deberán atender; y en caso de incumplir a un requerimiento del Instituto, se aplicarán las medidas de apremio que corresponda, sin perjuicio de las sanciones que correspondan, de forma oportuna.

Se estima una vía formal para que toda persona tenga la posibilidad de denunciar violaciones a la falta de publicación de las obligaciones de transparencia, ante el Instituto, así, los particulares podrán alertar el posible incumplimiento parte de algún sujeto obligado de la omisión de poner a disposición del público de manera actualizada la información derivada de la Ley General, promoviendo la participación de la ciudadanía sin acotarla.

La denuncia será atendida por el Instituto, el cual deberán subsanar las omisiones, y el sujeto obligado tendrá la obligación de enviar el respectivo informe con justificación, respecto de los hechos o motivos de la denuncia. El Instituto podrá poseer la facultad de realizar las verificaciones virtuales correspondientes, así como solicitar los informes complementarios al sujeto obligado, para reunir mayores elementos de juicio para resolver la denuncia, en el entendido que los sujetos obligados deberán atender cada requerimiento.

Sobre los medios de impugnación, el recurso de Revisión ante el Instituto otorga la posibilidad a los particulares que solicitan información para impugnar las decisiones; por ello, y con la finalidad de homologar los plazos de respuesta de los órganos garantes, se establece como plazo improrrogable de 40 días, la resolución del recurso por parte del Instituto.

Resulta necesario facultar al Instituto para prevenir al recurrente en una sola ocasión, a fin de que subsane la omisión a alguno de los elementos que debe contener el escrito por el que se interpone el recurso de revisión, dentro de un plazo de 5 días, apercibiéndolo de, en caso de no desahogar dicha prevención, el recurso de revisión se tendría por no presentado. En el proyecto de iniciativa, se estableció la suplencia de la deficiencia de la queja a favor del recurrente durante el procedimiento, por lo que ciertos estándares mínimos habrán de homologarse.

El recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional otorgará la posibilidad de impugnar las resoluciones del Instituto Estatal, cuando un peticionario presuma que se contraviene el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, a fin de que los particulares puedan acudir ante una instancia superior que garantice y salvaguarde el ejercicio de sus derechos.



Para el caso de la inobservancia de las disposiciones del proyecto de decreto, se establecen medidas de apremio y sanciones en materia de acceso a la información. Se consideró oportuno establecer medidas de apremio que podrá imponer el Instituto para asegurar el cumplimiento de sus decisiones. Se señalan las conductas sujetas a responsabilidad, derivadas del incumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la ley, a fin de que dicho incumplimiento sea sancionado ya sea por el Instituto o, en su caso, por la autoridad competente, después de haberle dado vista para que desahogue el procedimiento y en su caso aplique la sanción correspondiente.

b).- Iniciativa presentada el día 16 de febrero del año en curso, por los diputados Juan Quiñonez Ruíz y Carlos Manuel Ruíz Valdez, integrantes de la Fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de esta Sexagésima Sexta Legislatura Local.

En primer término esta iniciativa propone una reforma a la Ley actual, no una reforma integral.

Se incorporan como sujetos obligados los organismos públicos descentralizados estatales y municipales; las empresas de participación estatal y municipal; los fideicomisos públicos estatales, municipales y de organismos públicos descentralizados; el Tribunal Electoral del Estado de Durango; el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los Partidos y agrupaciones políticas u organismos semejantes reconocidos por las leyes, con registro en el Estado, los candidatos independientes y los sindicatos que reciban o manejen recursos públicos.

Incorpora el principio de "*presunción de existencia*", entendiéndose por este que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.

De igual manera incorpora el de *Suplencia de la deficiencia*: entendiéndose como no puede negarse información por deficiencias formales de las solicitudes, precisando que los sujetos obligados y el Instituto deben suplir cualquier deficiencia formal, así como orientar y asesorar para corregir cualquier deficiencia sustancial de las solicitudes de los particulares en materia de información pública.

Propone expedir en forma gratuita las primeras veinte copias simples relativas a la información solicitada.

c).- Iniciativa presentada el día 15 de marzo del 2016, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo:

Dicha iniciativa propone la expedición de una nueva ley, contempla la estructura que deberá tener el IDAIP, se establecen facultades para emitir criterios de interpretación que estime pertinentes el Organismo Garante, se fortalecen y articulan los procedimientos del organismo garante que deberá vigilar que los sujetos obligados den cabal cumplimiento a sus obligaciones de transparencia, así como dar recomendaciones, términos y plazos para que éstos cumplan con sus obligaciones.

Un punto destacable es el que todos los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive de su ejercicio, competencia o funciones.

Se definen los criterios para que la información sea clasificada como confidencial y para dar cumplimiento a su verificación los organismos garantes realizarán verificaciones virtuales a los portales de Internet de los sujetos obligados.

Se contemplan también los mecanismos necesarios para asegurar el principio constitucional de máxima publicidad, se reconoce en la presente iniciativa, que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en su quehacer gubernamental, será accesible a cualquier persona, por lo que no podrá clasificarse como reservada la información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.

Por otra parte, la ley contempla que los ciudadanos presenten denuncias contra quienes incumplan sus obligaciones en materia de transparencia, lo que conlleva a que se incorporen las causas para sancionar a los servidores públicos.

Así mismo, considera la prueba de daño y prueba de interés público, para determinar la clasificación de información, a efecto de realizar un análisis y estudio para verificar la oportunidad para clasificar la información, y la segunda la prueba de interés público, regula a aquellas excepciones que protegen derechos o intereses privados o particulares.



Dentro de la ley se establece que los legisladores, deberán dar detalles del dinero público que reciben por concepto de bonos, ingresos, prestaciones, primas y gratificaciones, la cantidad de gente que tienen a su cargo, así como los gastos de representación y viáticos, y el objeto de la comisión correspondiente.

Se deberán transparentar los resultados de adjudicaciones directas, invitaciones restringidas y licitaciones de cualquier naturaleza, por lo que se hará una versión pública del expediente y los contratos celebrados, la convocatoria y los fundamentos legales del caso, los nombres de los participantes y el nombre del ganador, entre otros documentos.

Se incorporan en el nuevo documento acciones gubernamentales como lo son Gobierno Abierto, Información Proactiva e Información Focalizada.

Los sindicatos que ejerzan recursos públicos deberán mantener impreso y en su sitio de internet la información sobre contratos y convenios entre gremio y autoridades, el padrón de socios y la relación detallada de sus recursos públicos, económicos, en especie, bienes o donativos, por lo que los sindicatos se transparentan.

Los gremios de maestros y trabajadores del Estado deberán subir a sus páginas web la información, descrita en el párrafo anterior y serán en todo momento responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información, como lo establece la Ley.

d).- Por último, el día 12 de abril de 2016, se dio cuenta en el Pleno de esta Legislatura de la Iniciativa propuesta por el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIP en adelante):

Dicha iniciativa propone una nueva Ley.

Establece un apartado específico de objetivos de la Ley, que destacan entre otros:

- Establecer la competencia del Órgano Garante, en materia de transparencia y acceso a la información;
- Constituir las bases que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, para que sean sencillos y expeditos;
- Disponer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente;
- Regular la coordinación y participación del órgano garante estatal en el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y

Se incorporan definiciones, con el propósito de fijar un lenguaje homogéneo con la Ley General, tales como: Sistema Nacional de Transparencia, Plataforma Nacional, Unidad de Transparencia, Comité de Información, Servidor Público, formatos abiertos, datos abiertos, entre otros.

Para la aplicación e interpretación de la Ley, se contemplan disposiciones que garantizan el ejercicio del derecho de acceso a la información en igualdad de condiciones, sin discriminación, en lenguaje sencillo y supliendo cualquier deficiencia.

Se integran como sujetos obligados de la Ley, los fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado.

Se propone un procedimiento público, abierto y con criterio de igualdad de género para la selección de los Comisionados que integran el Órgano Garante Estatal.

Se establece la figura del Consejo Consultivo del Órgano Garante, como un órgano de consulta y asesoría en la planeación, orientación, sistematización y promoción de las actividades relacionadas con la transparencia y acceso a la información pública que emprenda el Instituto.

En este contexto, se considera un procedimiento específico que permite a las personas, presentar denuncias ante el Instituto, derivadas del incumplimiento a las obligaciones de transparencia en que puedan incurrir los sujetos obligados.



Se establece un apartado relativo a la implementación de políticas de transparencia proactiva, que incentiva la publicación de información adicional y de interés general para la sociedad.

Se propone reducir el periodo máximo de reserva de la información, de 12 a 5 años, en congruencia con lo dispuesto en la Ley General.

Se dispone la implementación de mecanismos de colaboración y apertura gubernamental, entre la sociedad y los sujetos obligados bajo un esquema de Gobierno Abierto.

Se prevé el recurso de revisión, como medio de impugnación en contra de las respuestas proporcionadas por los sujetos obligados a los particulares, el cual podrá interponerse tanto en la Unidad de Transparencia que corresponda como ante el Instituto.

Se armoniza el apartado relativo a las medidas de apremio y sanciones, conforme a lo dispuesto por la Ley General, a fin de facultar al Instituto para imponer al servidor público encargado de acatar la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o las personas físicas o morales responsables, las medidas de apremio que aseguren el cumplimiento de sus resoluciones.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Como pudo observarse, las iniciativas descritas anteriormente coinciden básicamente en el fin de armonizar nuestra Ley Local de Transparencia con la Norma General expedida por el Congreso de la Unión.

Conviene tener en cuenta que la armonización planteada debe respetar los límites a los que como Congreso Local estamos sujetos, en virtud del contenido de una Ley General ya que como es de sobra conocido, una Ley de este tipo distribuye competencias para el ejercicio de una función de interés público.

Sobre este aspecto se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 5/2010, misma que se transcribe en su integridad:

LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES.

Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, de ahí que no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica. Si no fuera así, las leyes locales en las materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo establecido por el legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues se vaciaría el concepto mismo de concurrencia. En este sentido, las entidades federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley general, pero no reducirlas, pues ello haría nugatoria a ésta.

Igualmente resulta ilustrativa sobre el particular la tesis aislada VII/2007 emitida por el propio Pleno del Alto Tribunal, cuyo texto es:

LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.

La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.

Es importante tener claro el criterio jurisdiccional al que estamos sujetos cuando ejercemos facultades legislativas de armonización, y más aún cuando se trata de un derecho humano fundamental.

Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala como sus objetivos:



- I.- Distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información;*
- II.- Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información;*
- III.- Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos;*
- IV.- Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos garantes;*
- V.- Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente;*
- VI.- Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes;*
- VII.- Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región;*
- VIII.- Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y*
- IX.- Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.*

Esta Dictaminadora, considera importante tener claros los criterios jurisdiccionales en materia de leyes generales, así como el objetivo de la Ley General, a fin de ser precisos en la construcción normativa local y no incurrir en una falta ya sea de acción u omisión.

SEGUNDO. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva OC-5/85 señaló que: *el mismo concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto.*

Sin duda, las iniciativas que se dictaminan coinciden con esta opinión, pues comparten la convicción que los temas de la transparencia, acceso a la información y la apertura gubernamental, son evidencias claras de que en nuestra entidad existe la rendición de cuentas y es una oportunidad más para que el Estado, continúe siendo punta de lanza y esté a la vanguardia en asuntos de gran calado, que benefician a la sociedad, como el que nos ocupa.

Es por ello, que este ejercicio de armonización de nuestra Ley de Transparencia, con la multicitada Ley General, debe comprenderse e insertarse como una acción más hacia un federalismo cooperativo, donde lejos de fortalecer el poder central, reconoce la intensa participación de las entidades federativas tanto en el aspecto legislativo como ejecutivo, porque es aquí, localmente, donde se ejercerán las atribuciones y se hará valer, cabalmente, el derecho de acceso a la información.

TERCERO. Más allá de cualquier elemento retórico del significado legal, social, cultural y político de la modernización legislativa del derecho de acceso a la información nos centraremos en la descripción del contenido del presente dictamen.

En primer término señalamos que definimos, en congruencia con la Ley General, el Derecho de Acceso a la Información, como el derecho a solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, que obre en poder de los sujetos obligados, eliminando en consecuencia, toda atribución, a nivel nacional, de solicitar al titular del derecho, acredite su interés para acceder a la información pública.



Resalta también, con la reserva que debe tomarse el concepto, el nacimiento de la jurisprudencia administrativa en materia de transparencia; ahora el IDAIP deberá atender los criterios de interpretación que emita el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como orientadores de su labor.

Otra disposición, no menos importante, es la que señala, categóricamente, la prohibición de toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o el derecho de acceso a la información pública; en ese sentido, se impone la carga a los Sujetos Obligados, de proveer, en la medida de su capacidad técnica y financiera, de los medios necesarios para que toda persona, en igualdad de condiciones, pueda ejercer su derecho.

Asimismo, se integran una serie de principios que regirán, desde este momento, el actuar del Organismo Garante, sin que ello se entienda, que en el pasado el IDAIP se haya desempeñado de forma opuesta a su naturaleza, por el contrario, con la descripción de esta serie de principios, el citado Instituto cuenta con mayores elementos que dan mayor fuerza y reconocimiento a sus determinaciones.

Entre las nuevas facultades otorgadas al Instituto, destaca la de interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Asimismo, se amplían sus atribuciones en materia de cultura de la transparencia y de relaciones interinstitucionales, con el propósito de promover, desarrollar e impulsar estrategias que redunden en el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información.

Mención especial merece, la creación del Consejo Consultivo, como un ente ciudadano, que proveerá al Instituto de recomendaciones y opiniones, no vinculantes, en materia presupuestal y financiera y demás temas relativos a la transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, fortaleciendo así la democracia participativa.

Destaca también, el mandamiento para los sujetos obligados y en su caso para el Instituto de suplir cualquier deficiencia, a fin de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, tema que no requiere de mayor explicación, pues estamos ante un Derecho Humano.

Uno de los conflictos que se enfrentaban con la difusión de esta información, tenía lugar durante los procesos electorales, había criterios que se pronunciaban a favor de bloquear el acceso a estos datos, pues representaban, para algunos, propaganda gubernamental que incidía en el ánimo del electorado.

Otros tantos señalaban que, por el contrario, esta información debía permanecer a la vista, con el propósito de que la sociedad contase con elementos suficientes para evaluar las propuestas y tomar la decisión que mejor atendiera sus inquietudes.

En consecuencia y, para poner fin a tal discusión, y derivado de un mandato de la Ley General, esta nueva normatividad establece, que la información publicada, no constituye propaganda gubernamental y, que salvo disposición expresa en contrario, los Sujetos Obligados deberán mantener accesible la información en el portal de internet durante los procesos electorales, comprendiendo dentro de ellos la etapa de las precampañas.

Por otro lado, para garantizar que esta información se encuentre disponible y debidamente actualizada, se prevén los mecanismos de verificación y de denuncia, lo anterior a través de la verificación, el Instituto continuará con las revisiones que a la fecha ha venido haciendo, pero las mismas ya podrán ser de tipo aleatorio o muestral y periódico, para que en el caso de que el Sujeto Obligado persista en algún incumplimiento, se tengan las condiciones para imponer medidas de apremio o sanciones, en su caso.

Para poder decir que se garantiza el ejercicio de algún derecho, resulta imprescindible consagrar medios de defensa, aquí, solo apuntaremos que las reformas reflejadas en esta Ley son parte de la tarea de armonización y, que además, refrendan lo que el IDAIP ya venía haciendo al permitirle señalar, en sus resoluciones, el plazo, términos y los procedimientos para su cumplimiento.



En aquellos casos en que los particulares se sientan vulnerados por la resolución emitida, podrán hacer valer recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, o bien acudir ante el Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, se encuentra el articulado que señala las medidas de apremio y sanciones.

Más allá de transcribir las medidas de apremio y sanciones a las que pueden ser acreedores los responsables de atender las obligaciones que impone la Ley, resaltaremos dos temas en particular.

Por un lado, el Organismo Garante, amplía sus facultades sancionadoras, en donde ya puede emplazar a juicio a las personas responsables de atender las obligaciones que la Ley impone al Sujeto Obligado, tengan o no el carácter de servidores públicos. Esta atribución viene a ser congruente con los objetivos de la propia Ley, pues son llamados a rendir cuentas, directamente, los sindicatos y las personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad.

Finalmente, se prevé una medida que de igual forma constituye una sanción; la publicidad que dará el Organismo Garante en su portal de internet, sobre el incumplimiento de los Sujetos Obligados. De esta manera, además de aplicar un castigo a la persona responsable, el propio Sujeto Obligado será expuesto públicamente, en virtud de no haber tomado las medidas necesarias para evitar llegar a ese extremo.

Finalmente, creemos importante señalar, que dos conceptos que deben transformarse en acciones para los sujetos obligados sobre todo para los relativos al Poder Público del Estado y los Municipios, nos referimos al Gobierno Abierto y a la transparencia Proactiva.

En el tema relativo al Gobierno Abierto: Se señala que el Instituto coadyuvará, con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil, en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.

El Gobierno Abierto es un modelo de gestión que permite conectar los principios de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas y tecnologías de la información para convertirlos en políticas públicas que promuevan el diálogo, la colaboración y la co-creación entre autoridades y ciudadanos para la atención de los principales asuntos públicos y la generación de beneficios públicos.

En el tema de Transparencia Proactiva: El Instituto emitirá políticas de transparencia proactiva, diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente Ley.

La transparencia proactiva requiere establecer mecanismos de acceso a la información, sin necesidad de que exista una previsión legal que obligue a su publicación.

Una sociedad que hace parte de su cultura el acceso a la información y la protección de los datos personales, está destinada al crecimiento y al desarrollo.

El contenido de este dictamen, recoge diversas ideas teóricas y prácticas que permiten al Estado dar un paso más en la materia, evolucionar de simples reglas de transparencia y acceso a la información, a generar principios y bases sólidas en la relación de todas aquellas entidades públicas o privadas que provocan el desarrollo de Durango con la comunidad.

Es decir, no se constriñe a la rendición de cuentas o el seguimiento de los recursos públicos como un mecanismo de fiscalización, este proyecto evoluciona en su propósito a uno de los elementos más complejos temas de estudio de la materia, tal y como fue mencionado en los conceptos de Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que la iniciativa cuyo estudio nos ocupa es procedente, con las adecuaciones realizadas a la misma, lo anterior, con fundamento en lo que dispone el artículo 182 último párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, en virtud de considerar que las mismas, obedecen al mejoramiento de forma y fondo jurídicos. Asimismo, se somete a la determinación de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO



LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango para quedar como sigue:

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

OBJETO DE LA LEY

Artículo 1. Esta Ley es de orden público e interés general, y de observancia general en el Estado de Durango, es reglamentaria de los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en materia de transparencia.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto, establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, candidatos independientes, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral, instituciones de educación superior o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado de Durango y los municipios que lo integran. Asimismo, agrupaciones políticas u organismos semejantes reconocidos por las leyes, con registro estatal.

Para cumplir con su objeto, esta Ley:

- I. Establece la competencia del Instituto, en materia de transparencia y acceso a la información;
- II. Establece las bases que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información;
- III. Establece procedimientos sencillos y expeditos en el ejercicio del derecho de acceso a la información;
- IV. Regula los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de inconstitucionalidad del órgano garante estatal;
- V. Establece las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente;
- VI. Promueve, fomenta e impulsa la difusión de la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región;
- VII. Promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia;
- VIII. Regula la coordinación y participación del órgano garante estatal en el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y
- IX. Establece los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

Artículo 3. Esta Ley tiene como finalidad:

- I. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a través del efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública;
- II. Contribuir al fortalecimiento del estado democrático y la vigencia del estado de derecho;



- III. Transparentar el ejercicio de la función pública mediante la difusión de la información que generen, administren o posean los sujetos obligados de manera oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral;
- IV. Garantizar el principio democrático de máxima publicidad;
- V. Promover entre los sujetos obligados la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad a fin de impulsar la contraloría ciudadana y el combate a la corrupción;
- VI. Garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos obligados a través de la generación y publicación de información sobre indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible;
- VII. Preservar la información pública mejorando la organización, clasificación, manejo y la sistematización de la información, y
- VIII. Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas;

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, que obre en poder de los sujetos obligados.

La información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la presente Ley, así como en la normatividad aplicable en sus respectivas competencias, la cual sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público en los términos dispuestos en la presente Ley.

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia.

Los criterios de interpretación que emita el INAI, en los términos de la Ley General, tendrán el carácter de orientador para el Instituto.

En lo no contenido por la presente en materia de notificaciones serán supletorias las disposiciones de la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa para el Estado de Durango.

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. ACUERDO DE CLASIFICACIÓN: El que realiza el Comité de Transparencia, para la clasificación de la información que tiene carácter de reservada.

II. AJUSTES RAZONABLES: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos.

III. ÁREAS: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalentes.

IV. COMISIONADO (A): Cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Durango.

V. CONSULTA DIRECTA: La prerrogativa que tiene toda persona de allegarse información pública, sin intermediarios.

VI. COMITÉ DE TRANSPARENCIA: Instancia a la que hace referencia el artículo 40 de la presente Ley.

VII. DATOS ABIERTOS: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes características:

a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito;

b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;

c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;

d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro;

e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;

f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto;

g) Primarios: Proviene de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;

h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;

i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna;

j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente;

VIII. DATOS PERSONALES: La información concerniente a una persona física, identificada o identificable, relativa a sus características físicas y datos generales como son: nombre, domicilio, estado civil, edad, sexo, escolaridad, número telefónico y datos patrimoniales; así como los que corresponden a una persona en lo referente a su origen racial y étnico; las opiniones políticas, convicciones filosóficas, religiosas, morales; afiliación sindical o política; preferencias sexuales; estados de salud físicos o mentales, relaciones familiares o conyugales u otras análogas que afecten la intimidad.



IX. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Derecho humano que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, que obre en poder de los sujetos obligados.

X. DOCUMENTO: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.

XI. ESTADO: El Estado Libre y Soberano de Durango.

XII. EXPEDIENTE: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados.

XIII. FUENTE DE ACCESO PÚBLICO: Aquellos sistemas de información cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, no impedida por una disposición limitativa y sin más exigencia que, en su caso, el pago de un derecho contemplado en la Ley de Hacienda del Estado de Durango y Leyes de Ingresos Municipales;

XIV. FORMATOS ABIERTOS: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios.

XV. FORMATOS ACCESIBLES: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que la información pueda encontrarse.

XVI. INFORMACIÓN: Aquélla contenida en los documentos que los sujetos obligados generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan por cualquier título, o aquélla que por disposición legal deban generar.

XVII. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Aquella que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

XVIII. INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados.

XIX. INFORMACIÓN PÚBLICA: Toda información contenida en documentos; fotografías; grabaciones; y en soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que se cree con posterioridad, que se encuentre en posesión de los sujetos obligados como resultado del ejercicio de sus atribuciones u obligaciones.

XX. INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO: La información que los sujetos obligados deben difundir, actualizar y poner a disposición del público en medios electrónicos.

XXI. INFORMACIÓN RESERVADA: La información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley y cuyo acceso está limitado por razones de interés público.

XXII. INAI: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

XXIII. INSTITUTO: El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.

XXIV. LEY GENERAL: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

XXV. LEY: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

XXVI. PERSONA: Todo ser humano sujeto de derechos y obligaciones o personas morales creadas conforme a la Ley.

XXVII. PLATAFORMA NACIONAL: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el artículo 48 de la presente Ley.

XXVIII. PRUEBA DE DAÑO: Procedimiento para valorar, mediante elementos objetivos o verificables, que la información clasificada daña el interés público protegido al ser difundida.



XXIX. RECURSOS PÚBLICOS: Aquellos provenientes del Estado y/o los municipios.

XXX. SERVIDORES PÚBLICOS: Los mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 175 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.

XXXI. SISTEMA NACIONAL: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

XXXII. SUJETOS OBLIGADOS: Los señalados en el artículo 24 de esta Ley.

XXXIII. UNIDAD DE TRANSPARENCIA: Instancia a la que hace referencia el artículo 42 de esta Ley.

XXXIV. VERSIÓN PÚBLICA: Documento o expediente al que se da acceso a información eliminando y omitiendo las partes o secciones clasificadas.

Artículo 6. En cada uno de los rubros de información pública de oficio que los sujetos obligados deben difundir en internet, señalados en la presente Ley, se deberá indicar el área responsable de generar la información.

Artículo 7. Conforme al principio de máxima publicidad, en caso de duda razonable entre la publicidad y la reserva de la información, el servidor público deberá favorecer el principio de máxima publicidad de la misma, o bien, siempre que sea posible, elaborar versiones públicas de los documentos que contengan la información clasificada como reservada o confidencial.

Artículo 8. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos.

CAPÍTULO II

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

SECCIÓN PRIMERA

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL INSTITUTO DURANGUENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 9. En la aplicación e interpretación de la presente Ley, se consideran los siguientes principios:

I. CERTEZA: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones del Instituto son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.

II. EFICACIA: Obligación de este Instituto para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;

III. IMPARCIALIDAD: Cualidad que debe tener este Instituto, respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

IV. INDEPENDENCIA: Cualidad que debe tener este Instituto para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna,

V. LEGALIDAD: Obligación de este Instituto de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

VI. MÁXIMA PUBLICIDAD: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

VII. OBJETIVIDAD: Obligación de este Instituto de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;

VIII. PROFESIONALISMO: Los servidores públicos que laboren en este Instituto, deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

IX. TRANSPARENCIA: Obligación de este Instituto de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LOS PRINCIPIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 10. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley y demás normatividad aplicable, los sujetos obligados y el Instituto deberán atender a los principios señalados en la presente sección.

Artículo 11. Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás. Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados. Para dar cumplimiento a esta disposición el Instituto podrá crear una unidad que garantice y promueva el acceso a la información en igualdad de condiciones evitando toda discriminación.

Artículo 12. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley así como las demás normas aplicables.

Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.

Artículo 15. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Artículo 16. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo alguno.

Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad.

Artículo 18. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública se rige por el principio de gratuidad de la información, por lo que el solicitante sólo cubrirá el costo del material en que le sea proporcionada y, en su caso, los gastos de envío de la misma. En caso de que se soliciten copias certificadas de los documentos en los que obre la información, el solicitante cubrirá el pago de los derechos que al efecto se establezcan en la Ley de Hacienda del Estado de Durango y en sus respectivas leyes de ingresos municipales. Únicamente se certificarán las copias de aquellos documentos que consten en original o con firmas originales. En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos.

Artículo 19. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Artículo 20. Se presume que la información existe si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.

Artículo 21. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.

Artículo 22. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley.

Artículo 23. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.



CAPÍTULO III DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

Artículo 24. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, candidatos independientes, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral, instituciones de educación superior o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado de Durango y los municipios que lo integran. Asimismo, agrupaciones políticas u organismos semejantes reconocidos por las leyes, con registro estatal.

Artículo 25. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna;

II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del Titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia;

III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia;

IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad aplicable;

V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y Accesibles;

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;

VII. Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los términos que este determine;

VIII. Reportar trimestralmente al Instituto, el número de solicitudes de información presentadas y la información objeto de las mismas; el número de solicitudes procesadas y respondidas, la cantidad de solicitudes que no procedieron y el fundamento de cada una de ellas, así como el número de solicitudes pendientes, las prórrogas por circunstancias excepcionales, el tiempo de procesamiento y la cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea;

IX. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realice el Instituto y el Sistema Nacional;

X. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos;

XI. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto.

XII. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia;

XIII. Difundir proactivamente información de interés público;

XIV. Dar atención a las recomendaciones del Instituto;

XV. Asegurar la protección de los datos personales en su posesión, y

XVI. Las demás que resulten de la normatividad aplicable.

Artículo 26. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley General, esta Ley y demás normatividad que derive de ellas, en los términos que las mismas determinen.

Artículo 27. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el artículo anterior por sí mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el caso



de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable de coordinar su operación.

TÍTULO SEGUNDO

RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I

DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 28. El Instituto formará parte del Sistema Nacional de Transparencia, coadyuvará en la generación de información de calidad, en la gestión de la información, en la promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura de transparencia y su accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectiva.

Artículo 29. El Instituto, a través del Comisionado (a) Presidente (a) o un representante designado por el Consejo General, participará en el desarrollo de los criterios para la publicación de los indicadores que permitan a los sujetos obligados rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados.

CAPÍTULO II

DEL INSTITUTO DURANGUENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 30. El Instituto es un órgano autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, así como por lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables. El patrimonio del Instituto se integrará con los bienes muebles e inmuebles que se destinen para el cumplimiento de sus actividades, las partidas que anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos del Estado, los fondos y las donaciones que reciba, así como los ingresos que perciba por cualquier concepto.

Artículo 31. El Instituto tendrá un Consejo General, que será el órgano máximo de autoridad y estará integrado por tres comisionados, quienes designarán a su presidente de entre sus miembros. En su conformación se privilegiará la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como se procurará la igualdad de género.

La duración del cargo de los Comisionado (as) no excederá de siete años, sin posibilidad de reelección y se realizará de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía.

Artículo 32. En los procedimientos para la selección de los Comisionados (as) se garantizará la transparencia, independencia y participación de la sociedad, conforme al siguiente procedimiento:

El Congreso del Estado a través de la Comisión facultada por la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, emitirá una convocatoria pública y de consulta abierta, para recibir propuestas de candidatos a ocupar el cargo de Comisionados (as), correspondiendo a dicha Comisión entrevistar a los aspirantes a fin de conformar las ternas para la elaboración del dictamen.

Artículo 33. La Comisión correspondiente, hará la valoración de los aspirantes, atendiendo a los principios de transparencia, independencia y participación de la sociedad; y presentará al Pleno del Congreso del Estado, una terna por cada Comisionado (a) y su suplente, y acompañará la documentación soporte que acredite el cumplimiento de los requisitos del artículo 34 de esta Ley, para la aprobación del nombramiento final.

Los Comisionados (as) serán designados (as) por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado. Si realizadas al menos tres rondas de votación no se cubriera la totalidad de los votos para elegir Comisionado (a), se desechará la terna y se pedirá a la Comisión correspondiente que presente una nueva terna de aspirantes registrados en el proceso de selección.

Una vez electos (as), los (las) Comisionados (as) rendirán la protesta correspondiente ante el pleno del Congreso.

Artículo 34. Para ser Comisionado (a) se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Tener al menos treinta años cumplidos al día de la designación;



- III. Contar con título y cédula profesional legalmente expedidos en nivel de licenciatura o su equivalente;
- IV. Gozar de reconocido prestigio personal y profesional;
- V. No haber sido inhabilitado (a) para el ejercicio público;
- VI. No haber sido dirigente de ningún partido o asociación política, ni Ministro de ningún culto religioso, durante el año previo a su nombramiento;
- VII. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión en sentencia ejecutoria; pero, si se tratase de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, y
- VIII. Acreditar conocimiento y experiencia en la materia.

Artículo 35. El cargo de Comisionado (a) es incompatible con cualquier otro empleo salvo la docencia, esta última siempre y cuando no se trate de tiempo completo.

Las ausencias temporales, por más de diez días hábiles, y las definitivas de los comisionados (as) propietarios (as) serán cubiertas por los respectivos suplentes. En caso de falta definitiva de ambos se procederá a la designación de un nuevo comisionado (a) para concluir el período respectivo en los términos previstos por esta ley.

En caso de renuncia de comisionados, cuando ésta se lleve a cabo después de los cuatro años de su gestión, el nombramiento relativo para ocupar esa vacante se hará por un nuevo período.

Artículo 36. Los Comisionados (as) sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Título Séptimo, Capítulo III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y serán sujetos de juicio político.

Artículo 37. El Instituto tendrá la estructura administrativa necesaria para la gestión y el desempeño de sus atribuciones. El Congreso del Estado, deberá otorgar un presupuesto adecuado y suficiente al Instituto para el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la presente Ley, conforme a las leyes en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria.

Artículo 38. El Instituto tendrá, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:

- I. Interpretar los ordenamientos que le resulten aplicables y que deriven del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y de la presente Ley;
- II. Desarrollar, administrar e implementar la Plataforma Nacional, en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normatividad que emita el Sistema Nacional de Transparencia;
- III. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito local, en términos de lo dispuesto en la presente Ley;
- IV. Presentar petición fundada al INAI, para que conozca de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General en su parte relativa;
- V. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información;
- VI. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo;
- VII. Designar, a través de su Comisionado Presidente, a los servidores públicos de su adscripción y administrar sus recursos materiales y financieros;
- VIII. Elaborar y remitir a la Secretaría de Finanzas, y de Administración su proyecto de presupuesto anual para que sea integrado al Proyecto de Presupuesto del Gobierno del Estado;
- IX. Presentar iniciativas ante el Congreso del Estado, en los asuntos relativos a su función;
- X. Expedir su Reglamento Interior y demás normas de operación;
- XI. Administrar los recursos humanos, bienes y patrimonio del instituto, así como determinar y autorizar su estructura orgánica y su personal;
- XII. Establecer los requisitos para el ingreso al servicio y al personal calificado y especializado en la materia promoviendo la no discriminación la rendición de cuentas la equidad de género y la cultura de la transparencia;
- XIII. Presentar al Congreso del Estado, el informe anual de labores, a través de su Presidente, en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango;
- XIV. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información;
- XV. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales;
- XVI. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información en el marco de las políticas de transparencia proactiva;
- XVII. Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus actividades o productos resulten de interés público o relevancia social;



- XVIII. Suscribir convenios de colaboración con otros Organismos garantes para el cumplimiento de sus atribuciones y promover mejores prácticas en la materia;
- XIX. Promover la igualdad sustantiva entre las personas, sin distinción de sexo, raza, edad, nacionalidad o cualquier otra condición;
- XX. Coordinarse con las autoridades competentes para que en los procedimientos de acceso a la información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la información necesaria en lenguas indígenas y Formatos Accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la misma lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes Razonables necesarios si se tratara de personas con discapacidad;
- XXI. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información;
- XXII. Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes locales que vulneren el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales;
- XXIII. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de acceso a la información;
- XXIV. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables;
- XXV. Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de conformidad con lo señalado en la presente Ley;
- XXVI. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la información pública;
- XXVII. El Instituto, en el ejercicio de sus atribuciones y para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, fomentará los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica;
- XXVIII. El Instituto podrá emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas internas en la materia;
- XXIX. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones; y
- XXX. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 39. El informe que el Instituto presente ante el Congreso, deberá señalar los resultados obtenidos con base en lo establecido en los planes y programas, haciendo mención expresa de los indicadores y metas que den cuenta del cumplimiento de los objetivos. El informe anual será publicado y difundido con amplitud. Su circulación será obligatoria en los sujetos obligados.

CAPÍTULO III

DE LOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA

Artículo 40. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar.

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecido para ello.

Artículo 41. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información;

V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia;

VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado;



- VII. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual;
- VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el artículo 97 de la presente Ley,
- IX. Declarar la inexistencia de la información solicitada con base en las constancias que justifiquen una búsqueda exhaustiva de la información o que la misma ha sido objeto de baja documental debidamente fundada y motivada; y
- X. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

CAPÍTULO IV

DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA

Artículo 42. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que se constituirá con los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros de que dispongan. Las unidades de transparencia tendrán como finalidad transparentar el ejercicio de la función que realicen los sujetos obligados y coadyuvar con el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y tendrán las siguientes funciones:

- I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos I, II, III y IV del Título Quinto de esta Ley y propiciar que las Áreas las actualicen periódicamente, conforme a la normatividad aplicable;
 - II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
 - III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;
 - IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;
 - V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
 - VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;
 - VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
 - VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío;
 - IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;
 - X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
 - XI. Capacitar al personal necesario de los sujetos obligados al que pertenecen para dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
 - XII. Asegurar que se mantenga actualizada la información pública de oficio en el portal de transparencia, dentro de los plazos establecidos;
 - XIII. Expedir las certificaciones de la información que obre en su poder, o solicitarlas ante la unidad respectiva de su adscripción;
 - XIV. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables, y
 - XV. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de la información entre el sujeto obligado y los particulares, que se desprendan de la normatividad aplicable.
- Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las respuestas a las solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente.

Artículo 43. Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes.

Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

CAPÍTULO V

DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO

Artículo 44. El Instituto para el mejor desempeño de sus funciones, contará con un Consejo Consultivo, que estará integrado por tres Consejeros cuyo cargo será honorífico por un plazo de tres años, por lo tanto, no tendrá remuneración y no generará relación laboral alguna con el Instituto.

En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de personas con experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia. Las instituciones u organizaciones de las que procedan no ejercerán en ellas representación alguna.

Los Consejeros deberán reunir los siguientes requisitos:



- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;
- II. Tener treinta años de edad, como mínimo al día de su nombramiento;
- III. Presentar por escrito la solicitud de aspirante para ocupar el cargo de Consejero (a) del Consejo Consultivo del Instituto;
- IV. Gozar de buena reputación y reconocido prestigio;
- V. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito doloso que amerite pena corporal.

Los Consejeros del Consejo Consultivo, contarán respectivamente con un suplente.

Para la elección de los integrantes del Consejo Consultivo, el Congreso del Estado, emitirá una Convocatoria pública abierta que propicie la participación de la sociedad, en la que se establezcan los requisitos que señala la presente Ley, el periodo de registro y el procedimiento de selección.

El procedimiento de selección estará a cargo de la Comisión que determine la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, la cual deberá, una vez cerrado el periodo de registro, integrar un expediente por cada uno de los participantes registrados y publicar en internet la lista de los aspirantes que dieron cumplimiento con los requisitos señalados en el presente artículo.

La Comisión respectiva del Congreso, llevará a cabo entrevistas con las personas que integran la lista de aspirantes, analizará el resultado de las mismas y propondrá un acuerdo mediante el cual el Pleno del Congreso, elegirá a los integrantes del Consejo Consultivo y sus respectivos suplentes, mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado presentes.

Artículo 45. El Consejo Consultivo es el órgano de consulta y asesoría en la planeación, orientación, sistematización y promoción de las actividades relacionadas con la transparencia y acceso a la información pública que emprenda el Instituto.

Los Consejeros del Consejo Consultivo, elegirán a su Presidente por un periodo de un año, el cual no podrá reelegirse, contarán con un Secretario Técnico, cargo que será ejercido por el Titular de la Secretaría Técnica del Instituto, quien participará en las sesiones del Consejo sólo con voz.

Artículo 46. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes facultades:

- I. Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento;
- II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente;
- III. Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes;
- IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición del Instituto o por iniciativa propia, sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales;
- V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas del Instituto;
- VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y
- VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información y su accesibilidad.

TÍTULO TERCERO

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Artículo 47. Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos que establezcan los Lineamientos de implementación que emita el Sistema Nacional de Transparencia.

Esta Plataforma se conformará según lo dispuesto en la Ley General.

Artículo 48. En conjunto con el INAI, el Instituto promoverá la publicación de la información de datos abiertos y accesibles.

TÍTULO CUARTO

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL

CAPÍTULO I

DE LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 49. Los sujetos obligados deberán cooperar con el Instituto para capacitar y actualizar, de forma permanente, a todos sus servidores públicos en materia del derecho de acceso a la información, a través de los medios que se considere pertinente.

Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes del Estado, el Instituto deberá promover, en colaboración con instituciones educativas y culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos relativos a la transparencia y acceso a la información.

Artículo 50. El Instituto, en el ámbito de su competencia o a través de los mecanismos de coordinación que al efecto establezcan, podrá:

I. Proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la importancia social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica en sus respectivas jurisdicciones;

II. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

III. Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se refiere esta Ley;

IV. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

V. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

VI. Promover, en coordinación con autoridades estatales y municipales, la participación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la información;

VII. Desarrollar, programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población;

VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto sociocultural, y

IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información.

Artículo 51. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto:

I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley;

II. Armonizar el acceso a la información por sectores;

III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y

IV. Procurar la accesibilidad de la información.

CAPÍTULO II

DE LA TRANSPARENCIA PROACTIVA

Artículo 52. El Instituto emitirá políticas de transparencia proactiva, en atención a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías previamente establecidas.

Artículo 53. El Sistema Nacional emitirá los criterios para evaluar la efectividad de la política de la transparencia proactiva, considerando como base, la reutilización que la sociedad haga a la información. La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, deberá permitir la generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objetivo claro, enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinado o determinable.

CAPÍTULO III



DEL GOBIERNO ABIERTO

Artículo 54. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvará, con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de gobierno abierto, entendido como un modelo de gestión que incorpora principios, políticas o acciones de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, participación ciudadana y colaboración, apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación, que permitan generar beneficios colectivos.

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los municipios, los organismos constitucionalmente autónomos y demás sujetos obligados en su respectivo ámbito de competencia, en materia de Gobierno Abierto deberán:

- I. Establecer políticas internas para conducirse de forma transparente;
- II. Generar las condiciones que permitan que permee la participación de ciudadanos y grupos de interés;
- III. Crear mecanismos para rendir cuentas de sus acciones, y
- IV. Promover la eficacia tanto en la organización de su trabajo como en su propio desempeño.

TÍTULO QUINTO

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 55. Los sujetos obligados deberán poner a disposición de los particulares, la información a que se refiere este Título en los sitios de Internet correspondientes de los sujetos obligados y a través de la Plataforma Nacional.

Artículo 56. Los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional, establecerán los formatos de publicación de la información para asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable.

Estos lineamientos contemplarán la homologación en la presentación de la información a la que hace referencia este Título y la Ley General por parte de los sujetos obligados.

Artículo 57. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse por lo menos cada tres meses. El Sistema Nacional emitirá los criterios para determinar el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las cualidades de la misma.

La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como la fecha de su última actualización.

Artículo 58. El Instituto verificará trimestralmente el cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título. Asimismo, podrán llevarse a cabo verificaciones en cualquier momento a petición de los particulares.

Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.

Artículo 59. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el cual deberá contar con un buscador.

La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza, adicionalmente deberán utilizar un lenguaje claro, accesible y que facilite su comprensión por parte de los usuarios. Además, las páginas deberán contar con buscadores temáticos.

Artículo 60. El Instituto y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena.

Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y desarrollar de forma progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información en la máxima medida posible.

Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, a través de la emisión de lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional.

Artículo 61. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión.



Artículo 62. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición expresa en contrario en la normatividad electoral.

Artículo 63. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable;

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, y

VII. Desagregar, por género, la información pública cuando así corresponda a su naturaleza, conforme al principio de equidad.

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 115 de esta Ley.

Artículo 64. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares.

CAPÍTULO II

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES

Artículo 65. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;

III. Las facultades de cada Área;

IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos;

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer;

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;

XII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;



XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

XV. Los planes estatales y municipales de desarrollo; los programas operativos anuales y sectoriales; las metas y objetivos de las unidades administrativas y los avances de cada uno de ellos;

XVI. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:

a) Área;

b) Denominación del programa;

c) Periodo de vigencia;

d) Diseño, objetivos y alcances;

e) Metas físicas;

f) Población beneficiada estimada;

g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal;

h) Requisitos y procedimientos de acceso;

i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;

j) Mecanismos de exigibilidad;

k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;

l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;

m) Formas de participación social;

n) Articulación con otros programas sociales;

o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;

p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo;

XVII. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

XVIII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;

XIX. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición;

XX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;

XXI. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

XXII. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable;

XXIII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;

XXIV. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;

XXV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

XXVI. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;

XXVII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables,



realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

XXVIII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

XXIX. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de terminación, y
14. El finiquito.

b) De las adjudicaciones directas:

1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;



10. El convenio de terminación, y

11. El finiquito;

XXX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;

XXXI. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible;

XXXII. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;

XXXIII. Padrón de proveedores y contratistas;

XXXIV. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;

XXXV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

XXXVI. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención;

XXXVII. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio;

XXXVIII. Los mecanismos de participación ciudadana;

XXXIX. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;

XL. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;

XLI. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos;

XLII. Los estudios financiados con recursos públicos;

XLIII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

XLIV. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;

XLV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

XLVI. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

XLVII. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos;

XLVIII. Las actas de entrega-recepción, una vez que estén legalmente concluidas;

XLIX. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente, y

L. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Los sujetos obligados deberán informar al Instituto y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado.

CAPÍTULO III

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ESPECÍFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

Artículo 66. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. En el caso del Poder Ejecutivo de Durango:

a). El Plan Estatal de Desarrollo;

b). El Presupuesto de Egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;

c). El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;

d). El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;

e). Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado; y

f). Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones.

g). El listado de los decretos administrativos que se expiden por materia;

h). El listado de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que se encuentren en trámite, así como las resoluciones de las mismas que hayan causado estado;



- i). Las estadísticas e indicadores en la procuración de justicia, desagregada con perspectiva de género;
- j). La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano ordenamiento territorial y ecológico, así como los tipos y usos de suelo;

II. En el caso de los municipios del Estado:

- a). El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los ayuntamientos;
- b). Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones y el sentido de votación de sus miembros sobre las iniciativas o acuerdos;
- c). Los municipios que cuenten con población indígena asentada de manera permanente o temporal, deberán implementar los mecanismos para que la información referida esté disponible en las lenguas indígenas correspondientes, utilizando los medios idóneos que permitan su comunicación en forma comprensible para todos, y
- d). La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales.

Artículo 67. Además de lo señalado en el artículo 65 de la presente Ley, los sujetos obligados del Poder Legislativo, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

- I. Agenda legislativa;
- II. Gaceta Parlamentaria;
- III. Orden del Día;
- IV. El Diario de Debates;
- V. Las versiones estenográficas en su caso;
- VI. Las actas de las sesiones del Pleno y las Comisiones;
- VII. El listado de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que se encuentren en trámite, así como las resoluciones de las mismas que hayan causado Estado;
- VIII. Los nombres, fotografía y currículum de los Diputados, incluyendo los suplentes, así como, en su caso, las comisiones o comités a los que pertenecen y las funciones que realicen en los órganos legislativos;

IX. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;

X. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;

XI. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;

XII. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;

XIII. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;

XIV. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, representaciones partidistas y centros de estudio u órganos de investigación;

XV. Los dictámenes de las cuentas públicas del Estado y de los Municipios, así como los estados financieros de los organismos públicos autónomos y demás entidades sujetas a fiscalización, en los términos de la ley de la materia;

XVI. Los montos asignados y los informes semestrales del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros otorgados a los Órganos de Gobierno, Comisiones, representaciones partidistas, a cada uno de los Diputados, y centros de estudio u órganos de investigación;

XVII. Las versiones de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.

XVIII. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa, y

XIX. Los informes de actividades que presentan los Diputados, el lugar donde los realizan y el origen de los recursos que utilizan.

Artículo 68. Además de lo señalado en el artículo 65 de la presente Ley, los sujetos obligados del Poder Judicial, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

- I. Las tesis y ejecutorias publicadas en el medio de difusión oficial respectivo o Gaceta de cada tribunal perteneciente al Poder Judicial, incluyendo, tesis jurisprudenciales y aisladas;



- II. Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;
- III. Las versiones estenográficas de las sesiones públicas;

IV. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los jueces y magistrados, y sus nombramientos, y

V. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen.

Artículo 69. Además de lo señalado en el artículo 65 de la presente Ley, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, deberá poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

- I. Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos registrados ante la autoridad electoral;
- II. Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos;
- III. La geografía y cartografía electoral;
- IV. El registro de candidatos a cargos de elección popular;
- V. El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de spots de los institutos electorales y de los partidos políticos;
- VI. Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los gastos de campañas;
- VII. La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos financiados por la autoridad electoral competente;
- VIII. La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales;
- IX. Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana;
- X. Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;
- XI. Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus funciones;
- XII. La información sobre votos de duranguenses residentes en el extranjero;
- XIII. Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio de los partidos políticos locales, y
- XIV. El monitoreo de medios.

Artículo 70. Además de lo señalado en el artículo 65 de la presente Ley, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, deberá poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

- I. El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones;
- II. Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron;
- III. Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso;
- IV. Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez concluido el Expediente;
- V. Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de no repetición;
- VI. La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los derechos humanos;
- VII. Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones que emite;
- VIII. Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen;
- IX. Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos;
- X. El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del Estado de Durango;
- XI. El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
- XII. Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar el cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de Derechos Humanos, y
- XIII. Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo.

Artículo 71. Además de lo señalado en el artículo 65 de la presente Ley, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, deberá poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

- I. La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de las resoluciones;
- II. Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones;
- III. Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas;
- IV. Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos obligados;
- V. Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión;



VI. En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus resoluciones, y

VII. El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos obligados.

Artículo 72. Además de lo señalado en el artículo 65 de la presente Ley, las instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración del programa con las asignaturas, su valor en créditos;

II. Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos;

III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto;

IV. La lista con los profesores con licencia o en año sabático;

V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para obtenerlos;

VI. Las convocatorias de los concursos de oposición;

VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos;

VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y

IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación.

Artículo 73. Además de lo señalado en el artículo 65 de la presente Ley, los partidos políticos con registro en el Estado y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia;

II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos;

III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil;

IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;

V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;

VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;

VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;

VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes; los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados, y el listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;

IX. El acta de la asamblea constitutiva;

X. Las demarcaciones electorales en las que participen;

XI. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;

XII. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos;

XIII. El directorio de sus órganos de dirección estatal, municipales y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales;

XIV. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido;

XV. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa;

XVI. El currículo de los dirigentes a nivel estatal y municipal;

XVII. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas nacionales;

XVIII. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente;

XIX. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normatividad interna;

XX. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;

XXI. Las resoluciones dictadas por los órganos de control;

XXII. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos estatales y municipales, así como los descuentos correspondientes a sanciones;

XXIII. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores;

XXIV. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan causado estado;

XXV. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;

XXVI. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de candidatos;

XXVII. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados para tal efecto, y

XXVIII. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y gastos.



Artículo 74. Además de lo señalado en el artículo 65 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información:

I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario;

II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso;

III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitado, distinguiendo las aportaciones públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban;

IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban presentarse en los términos de las disposiciones aplicables;

V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso o del fondo público;

VI. El padrón de beneficiarios, en su caso;

VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados para tal efecto, y

VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria.

Artículo 75. Además de lo señalado en el artículo 65 de la presente Ley, las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente información de los sindicatos:

I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros:

a) El domicilio;

b) Número de registro;

c) Nombre del sindicato;

d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia;

e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo;

f) Número de socios;

g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y

h) Central a la que pertenezcan, en su caso;

II. Las tomas de nota;

III. El estatuto;

IV. El padrón de socios;

V. Las actas de asamblea;

VI. Los reglamentos interiores de trabajo;

VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de trabajo, y

VIII. Todos los documentos contenidos en el Expediente de registro sindical y de contratos colectivos de trabajo.

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral, deberán expedir copias de los documentos que obran en los Expedientes de los registros a los solicitantes que los requieran, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información.

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.

Artículo 76. Además de lo señalado en el artículo 65 de la presente Ley, los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la siguiente información:

I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;

II. El directorio del Comité Ejecutivo;

III. El padrón de socios, y

IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan.

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.



Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en sus páginas de Internet, para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento, el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.

Artículo 77. Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados de manera obligatoria, el Instituto deberá:

- I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público;
- II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y competencias que la normatividad aplicable le otorgue, y
- III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como obligación de transparencia.

CAPÍTULO IV

DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE RECIBEN Y EJERCEN RECURSOS PÚBLICOS O EJERCEN ACTOS DE AUTORIDAD

Artículo 78. El Instituto, dentro de su respectiva competencia, determinará los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.

Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar al Instituto, un listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad.

Para resolver sobre el cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, el Instituto tomará en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación.

Artículo 79. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, el Instituto deberá:

- I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público;
- II. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y ejerzan recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue, y
- III. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos para ello.

CAPÍTULO V

DE LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Artículo 80. Las determinaciones que emita el Instituto deberán establecer los requerimientos, recomendaciones u observaciones que formulen y los términos y plazos en los que los sujetos obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será motivo para aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 81. El Instituto vigilará que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en los artículos 65 al 79 de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 82. Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo, se realizarán a través de la verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de manera oficiosa por el Instituto al portal de Internet de los sujetos obligados o de la Plataforma Nacional, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica.

Artículo 83. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las obligaciones de transparencia en términos de lo previsto en los artículos 65 al 79 de esta Ley, según corresponda a cada sujeto obligado y demás disposiciones aplicables.

Artículo 84. La verificación que realice el Instituto, se sujetará a lo siguiente:

- I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma;
- II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo establecido por esta Ley y demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe incumplimiento a lo previsto por la Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo caso formulará los requerimientos que procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias detectadas dentro de un plazo no mayor a veinte días;
- III. El sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimiento de los requerimientos del dictamen, y
- IV. El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo y si considera que se dio cumplimiento a los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo de cumplimiento.



El Instituto podrá solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la verificación.

Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la determinación, le notificará, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen.

En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Consejo General para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley.

CAPÍTULO VI

DE LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Artículo 85. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 65 al 79 de esta Ley y demás disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 86. El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas:

- I. Presentación de la denuncia ante el Instituto;
- II. Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado;
- III. Resolución de la denuncia, y
- IV. Ejecución de la resolución de la denuncia.

Artículo 87. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

- I. Nombre del sujeto obligado denunciado;
- II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;
- III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el incumplimiento denunciado;
- IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos y electrónicos del Instituto, y
- V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia.

Artículo 88. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:

- I. Por medio electrónico:
 - a) A través de la Plataforma Nacional, o
 - b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca.
- II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia del Instituto.

Artículo 89. El Instituto pondrá a disposición de los particulares el formato de denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, los particulares podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley.

Artículo 90. El Instituto, debe resolver sobre la admisión de la denuncia, dentro de los tres días siguientes a su recepción.

El Instituto, debe notificar al sujeto obligado la denuncia dentro de los tres días siguientes a su admisión.

Artículo 91. El sujeto obligado debe enviar al Instituto, un informe con justificación respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días siguientes a la notificación anterior.

El Instituto, puede realizar las verificaciones virtuales que procedan, así como solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera, para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para resolver la denuncia.

En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en el término de tres días siguientes a la notificación correspondiente.

Artículo 92. El Instituto deberá resolver la denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado deberá presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios. La resolución deberá ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado.

Artículo 93. El Instituto, deberá notificar la resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión.



Las resoluciones que emita el Instituto, a que se refiere este Capítulo, son definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo que corresponda, en los términos de la legislación aplicable.

El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del día siguiente al en que se le notifique la misma.

Artículo 94. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimiento de la resolución. El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución; si considera que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del Expediente.

Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificará, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución.

Artículo 95. En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del servidor público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes.

TÍTULO SEXTO INFORMACIÓN CLASIFICADA

CAPÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Artículo 96. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 97. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:

- I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;
- II. Expire el plazo de clasificación;
- III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información, o
- IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo señalado en el presente Título.

La información clasificada como reservada, según el artículo 109 de esta Ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento.

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.

Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del artículo 114 de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo.

Artículo 98. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes clasificados como reservados, por Área responsable de la información y tema.

El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó la información, el nombre del Documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga. En ningún caso el índice será considerado como información reservada.

Artículo 99. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.



Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

Artículo 100. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público;
- II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
- III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Artículo 101. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.

Artículo 102. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

- I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
- II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o
- III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.

Artículo 103. Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.

Artículo 104. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.

En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información.

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

Artículo 105. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.

Artículo 106. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional.

Artículo 107. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.

Artículo 108. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las versiones públicas.

CAPÍTULO II

DE LA INFORMACIÓN RESERVADA

Artículo 109. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

- I. Comprometa la seguridad pública del Estado y sus Municipios y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;
- II. La que ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona;
- III. La que pueda dañar la estabilidad económica y financiera del Estado;
- IV. Aquella cuya divulgación pueda causar un perjuicio a:
 - a).- La administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones aplicables
- V. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;
- VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
- VII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;



- VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;
- IX. Afecte los derechos del debido proceso;
- X. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
- XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y
- XII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

Artículo 110. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.

Artículo 111. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:

- I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o
- II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.

CAPÍTULO III

DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículo 112. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

Artículo 113. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.

Artículo 114. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.

Artículo 115. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades en materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal.

Artículo 116. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:

- I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
- II. Por ley tenga el carácter de pública;
- III. Exista una orden judicial;
- IV. Para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, o
- V. Cuando se transmita entre sujetos obligados, en términos de los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.

TÍTULO SÉPTIMO

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 117. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título.



Artículo 118. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

Artículo 119. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables.

Artículo 120. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:

- I. Nombre, o en su caso, los datos generales de su representante;
- II. Domicilio o medio para recibir notificaciones;
- III. La descripción de la información solicitada;
- IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y
- V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley.

La información de las fracciones I y IV del presente artículo, será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.

Artículo 121. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones.

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia.

Artículo 122. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen.

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles.

Artículo 123. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.

En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.

Artículo 124. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información.

Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 128 de la presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de información adicional.

La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento.

Artículo 125. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.

Artículo 126. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días.



Artículo 127. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.

Artículo 128. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.

Artículo 129. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.

Artículo 130. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información.

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado.

Artículo 131. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.

Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información.

Artículo 132. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes.

Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Artículo 133. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información deban ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente:

El área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:

- a) Confirmar la clasificación;
- b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y
- c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 127 de la presente Ley.

Artículo 134. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia:

- I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
- II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;
- III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y
- IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

Artículo 135. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.



Artículo 136. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la información.

CAPÍTULO II

DE LAS CUOTAS DE ACCESO

Artículo 137. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:

- I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
- II. El costo de envío, en su caso, y
- III. El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda.

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley de Hacienda del Estado de Durango y las leyes de ingresos municipales, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información. Asimismo, se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó.

Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley de Hacienda del Estado de Durango deberán establecer cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha ley.

Cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples, la información deberá ser entregada sin costo. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.

TÍTULO OCTAVO

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I

DEL RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 138. El solicitante podrá interponer recurso de revisión, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa, en la Plataforma Nacional o por otros medios electrónicos, ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.

Artículo 139. El recurso de revisión procederá en contra de:

- I. La clasificación de la información;
- II. La declaración de inexistencia de información;
- III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
- IV. La entrega de información incompleta;
- V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
- VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley;
- VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado;
- VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante;
- IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;
- X. La falta de trámite a una solicitud;
- XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;
- XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta;
- XIII. La orientación a un trámite específico, o
- XIV. La inconformidad con las razones que motivan una prórroga.

La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI del presente artículo, es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.

Artículo 140. El recurso de revisión deberá contener:

- I. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud;
- II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;
- III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;



IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;

V. El acto que se recurre;

VI. Las razones o motivos de inconformidad, y

VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud.

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto.

En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.

Artículo 141. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo anterior y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo.

No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante.

Artículo 142. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de veinticuatro días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca la ley, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de veinte días.

Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones.

Artículo 143. En todo momento, los Comisionados (as) deberán tener acceso a la información clasificada para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.

Artículo 144. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los Comisionados (as), por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 145. El Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos.

Para estos efectos, se entenderá por:

I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;

II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público, y

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.

Artículo 146. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:

I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Instituto lo turnará al Comisionado (a) ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento;

II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho convenga;

III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho;

IV. El Comisionado (a) ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión;

V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo, el Comisionado (a) ponente procederá a decretar el cierre de instrucción;

VI. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de instrucción, y

VII. Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá exceder de quince días.

Artículo 147. Las resoluciones del Instituto podrán:

I. Desechar o sobreseer el recurso;



- II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
- III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de cinco días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

Artículo 148. En las resoluciones el Instituto podrá señalarle a los sujetos obligados que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de conformidad con el Capítulo II del Título Quinto, denominado "De las obligaciones de transparencia comunes" en la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones.

Artículo 149. El Instituto deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones, a más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación.

Los sujetos obligados deberán informar al Instituto el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días.

Artículo 150. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberá hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Artículo 151. El recurso será desechado por improcedente cuando:

- I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la presente Ley;
- II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente;
- III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 139 de la presente Ley;
- IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 141 de la presente Ley;
- V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
- VI. Se trate de una consulta, o
- VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.

Artículo 152. El recurso será sobreesido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

- I. El recurrente se desista;
- II. El recurrente fallezca;
- III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia, o
- IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente Capítulo.

Artículo 153. Las resoluciones del Instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

Artículo 154. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones del Instituto, ante el INAI o el Poder Judicial de la Federación.

CAPÍTULO II

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 155. Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión del Instituto, los particulares podrán optar por acudir ante el INAI o ante el Poder Judicial de la Federación.

Artículo 156. El recurso de inconformidad ante el INAI procederá y se sustanciará de conformidad con lo establecido en el Título VIII, Capítulo II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 157. La sustanciación de los recursos de inconformidad ante el INAI deberá realizarse por medio del Sistema de Comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados, de la Plataforma Nacional de Transparencia.

CAPÍTULO III DEL CUMPLIMIENTO

Artículo 158. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto cumplimiento a las resoluciones del Instituto y deberán informar a este sobre su cumplimiento.

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán solicitar al Instituto, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución.

Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 159. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimiento de la resolución.

El Instituto verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que a su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el Instituto, deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo considera.

Artículo 160. El Instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre todas las causas que el recurrente manifieste así como del resultado de la verificación realizada. Si el Instituto considera que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo del Expediente. En caso contrario, el Instituto:

- I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento;
- II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución, y
- III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente Título.

TÍTULO NOVENO MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES CAPÍTULO I DE LAS MEDIDAS DE APREMIO

Artículo 161. El Instituto, en el ámbito de su competencia, podrá imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:

- I. Amonestación pública, o
- II. Multa de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado.

Artículo 162. El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en el portal de obligaciones de transparencia del Instituto y considerado en las evaluaciones que este realice.

En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el artículo 165 de esta Ley, el Instituto deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.

Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Artículo 163. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo 165 no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el artículo anterior. Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que correspondan.

Artículo 164. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por el Instituto y ejecutadas con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango, a través de los procedimientos que las leyes establezcan.

CAPÍTULO II

DE LAS SANCIONES

Artículo 165. La presente Ley contempla como causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas, al menos las siguientes:

- I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
- II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley;
- III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley;
- IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;
- V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley;
- VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente Ley;
- VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;
- VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos;
- IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable;
- X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho;
- XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial;
- XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución previa del Instituto, que haya quedado firme;
- XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el Instituto determine que existe una causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia;
- XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por el Instituto, o
- XV. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus funciones.

Artículo 166. Las sanciones se aplicarán de conformidad con los siguientes criterios:

- I. La gravedad de la falta cometida y la conveniencia de suprimir prácticas que atenten contra la transparencia, el acceso a la información pública o a la protección de datos;
- II. Las circunstancias y condiciones del incumplimiento a la ley;
- III. La reincidencia por parte del sujeto obligado en el incumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales;
- IV. Se considerará reincidente el sujeto obligado que incurra más de una vez en alguna o algunas de las conductas que se señalan en el artículo anterior; y
- V. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la falta cometida por el sujeto obligado.

Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones que se señalan en la presente ley, son independientes de aquellas del orden civil o penal que procedan, así como de los procedimientos de responsabilidad que corresponda instruir a los superiores jerárquicos de los responsables de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y los procedimientos para el resarcimiento del daño ocasionado por el sujeto obligado.

Artículo 167. Las conductas a que se refiere el artículo 165 de la presente Ley, serán sancionadas por el Instituto, según corresponda y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.

Artículo 168. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por el artículo 165 de esta Ley, son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos.

Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera independiente.

Para tales efectos, el Instituto podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que considere pertinentes, en los términos de las leyes aplicables.



Artículo 169. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos, el Instituto dará vista, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.

En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el Instituto deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado relacionado con éstos, cuando sean Servidores Públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos a que haya lugar.

Artículo 170. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de Servidor Público, el Instituto deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa.

La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto.

Artículo 171. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de Servidor Público, el Instituto será la autoridad facultada para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme a esta Ley; y deberá llevar a cabo las acciones conducentes para la imposición y ejecución de las sanciones.

Artículo 172. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior dará comienzo con la notificación que efectúe el Instituto al presunto infractor, sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgarán un término de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no hacerlo, el Instituto, de inmediato, resolverá con los elementos de convicción que disponga.

El Instituto, admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo; y concluido que esto sea, notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto resolverá, en definitiva, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor y, dentro de los diez días siguientes a la notificación, se hará pública la resolución correspondiente.

Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto, podrá ampliar por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de resolución.

Artículo 173. En las normas respectivas del Instituto, se precisará toda circunstancia relativa a la forma, términos y cumplimiento de los plazos a que se refiere el procedimiento sancionatorio previsto en esta Ley, incluyendo la presentación de pruebas y alegatos, la celebración de audiencias, el cierre de instrucción y la ejecución de sanciones. En todo caso, será supletorio a este procedimiento sancionador lo dispuesto en la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango.

Artículo 174. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con:

I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I, III, V, VI y X del artículo 165 de esta Ley.

Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate;

II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientos días de salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate, en los casos previstos en las fracciones II y IV del artículo 165 de esta Ley, y
III. Multa de ochocientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 165 de esta Ley.

Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta días de salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate, por día, a quien persista en las infracciones citadas en los incisos anteriores.

Artículo 175. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito, el Instituto deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.

Artículo 176. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus obligaciones de transparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.



Segundo. Se abroga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, aprobada mediante decreto número 157, de fecha 11 de julio de 2008, y publicada en el Periódico Oficial No. 4, de fecha 13 de julio de 2008; de igual forma, se derogan todas las reformas y adiciones que hubieren sido incorporadas.

Tercero. El Instituto expedirá su Reglamento Interior en un periodo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Cuarto. De conformidad con las disposiciones presupuestales de cada sujeto obligado se deberán implementar sistemas electrónicos de consulta, para permitir el acceso a la información de manera remota, en un plazo que no exceda de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Quinto. Los sujetos obligados, emitirán o modificarán sus reglamentos, para proporcionar a los particulares el acceso a la información pública, de conformidad a las bases y principios establecidos en esta Ley. Estos reglamentos deberán ser expedidos en un plazo que no exceda de doce meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Sexto. Los sujetos obligados, deberán de constituir los Comités de Transparencia, en un plazo de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Aquellos que ya cuenten con el mismo, o su similar, así como las Unidades de Transparencia, solo deberán formalizar el cambio de denominación en un plazo que no exceda de treinta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Séptimo. Las solicitudes de información o recursos que se encuentren en trámite ante los sujetos obligados o el Instituto se resolverán de conformidad con la ley que les dio origen.

Octavo. El Instituto deberá implementar procedimientos de verificación del cumplimiento de la información de oficio contenida en los portales de internet de los sujetos obligados de esta ley; la verificación deberá hacerse pública en forma trimestral.

Noveno. Los sujetos obligados deberán implementar las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que en materia de indicadores de gestión prevé la presente Ley.

Décimo. Los sujetos obligados deberán incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con la normatividad que emita el Sistema Nacional de Transparencia.

Undécimo. Dentro de los sesenta días posteriores de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Congreso del Estado de Durango, emitirá la convocatoria para la integración de los Consejeros del Consejo Consultivo del Instituto.

Décimo Segundo. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que administrarán y darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información, clasificación de la información, transparencia, gobierno abierto, transparencia proactiva y las demás que determine esta Ley.

Décimo Tercero. En tanto no se expida la Ley General en materia de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados, permanecerá vigente la normatividad local en la materia.

Décimo Cuarto. En aquellos conceptos en donde esta Ley, contemple el cobro en salarios mínimos, las obligaciones a cargo del infractor, serán cubiertas al valor que determine el presente decreto, hasta en tanto no se expida la ley que establezca una unidad de medida y actualización, de cuenta, o cualquiera que sea su denominación.

Décimo Quinto. El Instituto, dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor de esta Ley, realizará las acciones necesarias para capacitar a los Sujetos Obligados sobre las disposiciones contenidas en la presente Ley.

Décimo Sexto. Sin perjuicio de que la información que generen y posean es considerada pública, de conformidad con lo señalado en la presente Ley los municipios con población menor a 70,000 habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad con sus posibilidades presupuestarias, además podrán solicitar al Instituto que de manera subsidiaria divulgue vía internet las obligaciones de transparencia correspondientes.



H. Congreso del Estado
de Durango

LXVI LEGISLATURA 2013-2016

51

OFICIALÍA MAYOR
PROCESO LEGISLATIVO
SESIÓN ORDINARIA
DE LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
03 DE MAYO DE 2016
(10:00) HORAS

Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios continuarán cumpliendo con las obligaciones de información a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que emanan de ésta, en los plazos, términos y condiciones previstas en dicha ley y en las disposiciones referidas.

Décimo Séptimo. Las nuevas obligaciones establecidas serán aplicables solo respecto de la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Décimo Octavo. Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

El ciudadano Gobernador del Estado de Durango, sancionará, promulgará y dispondrá se publique circule y observe.

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 03 (tres) días del mes de mayo de 2016.

LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

rúbrica

**DIP. ROSAURO MEZA SIFUENTES
PRESIDENTE**

rúbrica

**DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA
SECRETARIO**

rúbrica

**DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA
VOCAL**

Rúbrica

**DIP. ISRAEL SOTO PEÑA
VOCAL**

rúbrica

**DIP. EUSEBIO CEPEDA SOLÍS
VOCAL**

PRESIDENTE: EL DIPUTADO SECRETARIO PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO, DARA LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE AUTORIZACIÓN AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA ENAJENAR A TITULO GRATUITO UNA SUPERFICIE DE 645,867.58 M2, QUE SE DESINCORPORAN DE LOS BIENES DE DOMINIO PRIVADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN FAVOR DE SUS LEGÍTIMOS POSESIONARIOS, UBICADA EN LA POBLACIÓN DE TAYOLTITA, CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIMAS, ESTADO DE DURANGO, PARA LA REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN DE SUS TÍTULOS DE PROPIEDAD.

DIPUTADO PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO: HONORABLE ASAMBLEA:

A la **Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública**, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, Iniciativa con proyecto de Decreto, enviada por el **C. C.P. JORGE HERRERA CALDERA**, Gobernador del Estado de Durango, mediante la cual solicita de esta Representación Popular, autorización para que el Gobierno del Estado de Durango, desincorpore del régimen de dominio privado



una superficie de 645,867.58 m², ubicada en la población de Tayoltita, cabecera municipal de San Dimas, Estado de Durango, y la enajene a favor de sus legítimos poseedores en una segunda etapa; por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada, y con fundamento en lo dispuesto por los *artículos 93 fracción I, 122 fracción IV, 176, 177, 178 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado*, nos permitimos someter a la determinación de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Esta Comisión que dictamina, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa aludida en el proemio del presente dictamen, da cuenta que la misma tiene como propósito conseguir de esta Representación Popular, la autorización para desincorporar del régimen del bienes de dominio privado del Gobierno del Estado, una superficie de 645,867.58 m², ubicada en la población de Tayoltita, cabecera municipal de San Dimas, Estado de Durango, y posteriormente la enajene a favor de sus legítimos poseedores, con el fin de regularizar en una segunda etapa los fundos legales ubicados en dicha población.

SEGUNDO. La presente Administración Estatal a cargo, del Titular del Poder Ejecutivo, dentro de su Plan Estatal de Desarrollo en su eje rector número 4 "Bienestar e Inclusión Social con Participación Ciudadana", se han realizado una serie de acciones que permiten garantizar a la sociedad duranguense la certidumbre jurídica de que el inmueble que han ocupado por años se encuentre regularizado y estos mismos, a su vez, cuenten con el amparo de un instrumento legal que los acredite como únicos dueños.

TERCERO. Es por eso, que para dar continuidad con las acciones que se implementaron en la pasada Administración Estatal mediante la regularización de diversos centros de población y con el objetivo primordial de llevar a cabo el ordenamiento de la tenencia del mayor número de inmuebles posibles en el territorio estatal, otorgando así certidumbre jurídica a las familias duranguenses que se encuentran en dicha situación respecto de su patrimonio inmobiliario.

CUARTO. Por lo que, para contribuir a lograr el propósito antes señalado, las sociedades mercantiles Minas de San Luis, S. A. de C. V. y Maderera Industrial de San Dimas, S. de R.L., acordaron y formalizaron mediante escritura pública número trescientos dieciocho del volumen nueve, de fecha 26 de agosto de 2009, pasada ante la fe del Lic. Carlos Guillermo Velasco Nájjar, Notario Público No.2 del Cuarto Distrito Judicial, inscrita el 08 de octubre de 2009 en el Registro Público de la Propiedad de Tayoltita, San Dimas, Dgo., bajo la inscripción 7 a foja 7 frente, del libro Uno, Tomo 27, donar al Gobierno del Estado de Durango la superficie total de 842,022.41 m², libre de todo gravamen, ubicado en la población de Tayoltita, cabecera municipal de San Dimas, Estado de Durango.

QUINTO. De igual manera, mediante Acuerdo Administrativo de fecha 30 de septiembre de 2009, el entonces Subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado de Durango, C.P. Mario Alberto Guerrero Nevárez, calificó de favorable la donación a Gobierno del Estado de Durango hecha por Minas de San Luis, S. A. de C. V. y Maderera Industrial de San Dimas, S. de R.L. consistente en 842,022.37 m² que conforman los polígonos motivo de la traslación de dominio, ubicados en la población de Tayoltita, cabecera municipal de San Dimas, Estado de Durango, libre de todo gravamen, al corriente de contribuciones, con sus mejoras, anexidades, servidumbres y con cuanto más le corresponda. Lo anterior, con el propósito de regularizar la precaria posesión de los inmuebles que lo conforman, esto, a través de la emisión de títulos de propiedad a sus legítimos poseedores para brindar certeza jurídica a su patrimonio familiar.

SEXTO. En ese mismo tenor, mediante Decreto No.442 de fecha 12 de diciembre de 2009, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 50 de fecha 20 de diciembre de 2009, se autorizó en una primera etapa al Ejecutivo del Estado la enajenación a título gratuito la superficie de



144,070.18 m² dentro de los polígonos denominados Uno Norte y Uno Sur, a favor de sus legítimos poseedores, ubicada en la población de Tayoltita, cabecera municipal de San Dimas, Estado de Durango.

SÉPTIMO. Los terrenos propiedad del Gobierno del Estado y que solicita en este acto recibir autorización por parte de esta Sexagésima Sexta Legislatura para su enajenación en una segunda etapa, como ya se mencionó anteriormente constan de una superficie de 645,867.58 m², que igualmente, se encuentran ubicados en la población de Tayoltita, cabecera municipal de San Dimas, Estado de Durango, dentro de las medidas y colindancias de los polígonos denominados Uno Norte y Uno Sur.

OCTAVO. Dentro de las facultades hacendarias del Congreso del Estado, se encuentran las establecidas en el artículo 82, fracción I, inciso e), numeral 2, de nuestra Carta Política Local, y que contempla la de autorizar al ejecutivo estatal, *“enajenar bienes inmuebles de su propiedad”*, con el presente dictamen, se pretende materializar dicha disposición; de igual forma el artículo 98 en su fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, dispone lo propio, y que es facultad y obligación del Gobernador del Estado, *“enajenar previa autorización del Congreso del Estado, los bienes que pertenezcan al Ejecutivo Estatal”*.

NOVENO. Derivado de lo anterior el artículo 122, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, dispone que es facultad del Congreso y de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública respectivamente, *“autorizar al Gobierno del Estado para la desincorporación y enajenación de bienes inmuebles de su propiedad”*. De igual forma el artículo 30, fracción IV de la Ley de Bienes del Estado de Durango, contempla que: *Los inmuebles del dominio privado del Estado que no sean adecuados para destinarlos a los fines a que se refiere el Artículo anterior, se podrán enajenar siempre que no existan razones que impongan la necesidad o la conveniencia de conservarlos, o que se justifique plenamente la enajenación, por la importancia del fin que haya de realizarlos con el producto que se obtenga. Dicha enajenación se realizará previo Decreto del Congreso del Estado y siempre que obedezca a los siguientes fines: IV.- Que se haga en favor de personas de derecho privado que requieran de disponer indispensablemente del inmueble, por razón de su ubicación u otras características, para la creación, fomento o conservación de una empresa que beneficie a la colectividad. . .*

DÉCIMO. A la iniciativa en comento, se le anexó la siguiente documentación que permite su dictaminación en sentido positivo:

1. Copia fotostática debidamente certificada de la Escritura Pública número trescientos dieciocho del volumen nueve, de fecha 26 de agosto de 2009, pasada ante la fe del Lic. Carlos Guillermo Velasco Nájjar, Notario Público No.2 del Cuarto Distrito Judicial, inscrita el 08 de octubre de 2009 en el Registro Público de la Propiedad de Tayoltita, San Dimas, Dgo., bajo la inscripción 7 a foja 7 frente, del libro Uno, Tomo 27, emitida por la Oficial del Registro Público de la Propiedad de Tayoltita, Durango.
2. Copia Fotostática del EXP. 01/2016, OFICIO No. 19, que contiene Certificado de Liberación de gravamen, expedido por la Oficial encargada del Registro Público de la Propiedad y Comercio, de Tayoltita, municipio de San Dimas, Durango, de fecha 3 de marzo de 2016, mediante la cual hace constar que las superficies ubicadas en el Lote de Terreno Fracción “A”, con una superficie total de 78-99-37.8 Has, del Lote de Terreno rústico, denominado fracción “B”, con una superficie total de 2-77-24.20 Has, y del Lote de Terreno rústico denominado Fracción “C”, con una superficie total de 2-43-60.41 se encuentran libres de gravamen.
3. Copia fotostática del Oficio No. DUOT-032/2016, signado por el Arquitecto César Guillermo Rodríguez Salazar, Secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, en donde



manifiesta que la superficie de 645,867.58 m², se considera viable para emitir decreto de donación a favor de sus legítimos poseedores, respecto de dicho inmueble ubicado en la localidad de Tayoltita, San Dimas, Durango.

4. Planos de ubicación de la superficie de 645,867.58 m², objeto de la presente enajenación, emitido por el Ingeniero Víctor Manuel Ruano Calderón, Director de Catastro del Gobierno del Estado de Durango, con las siguientes medidas y colindancias:

➤ **Polígono Uno Norte con superficie de 31,279.86 m² ubicado:**

- I. Al Noroeste: del punto 5 al punto 6, con una distancia de 37.22m, con rumbo N 30°36'24" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- II. Al Noroeste: del punto 6 al punto 7, con una distancia de 154.78m, con rumbo N 57°02'18" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- III. Al Suroeste: del punto 7 al punto 8, con una distancia de 51.40m, con rumbo S 53°00'01" O, colindando con Minas de San Luis S.A de C.V
- IV. Al Suroeste: del punto 8 al punto 9, con una distancia de 247.06m, con rumbo S 14°03'18" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- V. Al Noreste: del punto 9 al punto 5, con una distancia de 293.70m, con rumbo N 58°17'39" E, colindando con Polígono Uno Sur.

➤ **Polígono Uno Sur con superficie de 831,049.03 m² ubicado:**

- I. Al Noroeste: del punto 1 al punto 2, con una distancia de 126.13m, con rumbo N 16°45'05" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- II. Al Noroeste: del punto 2 al punto 3, con una distancia de 367.31m, con rumbo N 08°04'01" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- III. Al Noroeste: del punto 3 al punto 4, con una distancia de 141.99m, con rumbo N 17°12'54" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- IV. Al Noroeste: del punto 4 al punto 5, con una distancia de 173.00m, con rumbo N 30°49'26" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- V. Al Suroeste: del punto 5 al punto 9, con una distancia de 293.70m, con rumbo S 58°17'39" O, colindando con Polígono Uno Norte.
- VI. Al Suroeste: del punto 9 al punto 10, con una distancia de 31.12m, con rumbo S 13°56'10" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- VII. Al Suroeste: del punto 10 al punto 11, con una distancia de 537.91m, con rumbo S 18°32'10" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- VIII. Al Suroeste: del punto 11 al punto 12, con una distancia de 78.24m, con rumbo S 38°46'27" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- IX. Al Noroeste: del punto 12 al punto 13, con una distancia de 24.00m, con rumbo N 89°59'58" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- X. Al Suroeste: del punto 13 al punto 14, con una distancia de 39.05m, con rumbo S 39°48'21" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XI. Al Suroeste: del punto 14 al punto 15, con una distancia de 192.26m, con rumbo S 38°14'27" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XII. Al Suroeste: del punto 15 al punto 16, con una distancia de 182.24m, con rumbo S 69°46'31" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XIII. Al Suroeste: del punto 16 al punto 17, con una distancia de 208.39m, con rumbo S 74°41'48" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.



- XIV. Al Noroeste: del punto 17 al punto 18, con una distancia de 26.91m, con rumbo N 41°36'16" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XV. Al Suroeste: del punto 18 al punto 19, con una distancia de 74.93m, con rumbo S 68°28'10" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XVI. Al Suroeste: del punto 19 al punto 20, con una distancia de 40.43m, con rumbo S 60°08'49" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XVII. Al Sureste: del punto 20 al punto 21, con una distancia de 35.53m, con rumbo S 27°01'05" E, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XVIII. Al Sureste: del punto 21 al punto 22, con una distancia de 310.16m, con rumbo S 19°14'00" E, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XIX. Al Sureste: del punto 22 al punto 23, con una distancia de 120.00m, con rumbo S 60°12'34" E, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XX. Al Sureste: del punto 23 al punto 24, con una distancia de 105.24m, con rumbo S 59°51'44" E, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XXI. Al Noreste: del punto 24 al punto 25, con una distancia de 45.76m, con rumbo N 49°56'31" E, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XXII. Al Noreste: del punto 25 al punto 26, con una distancia de 962.25m, con rumbo N 58°41'35" E, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XXIII. Al Noreste: del punto 26 al punto 1, con una distancia de 290.04m, con rumbo N 40°23'31" E, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.

DÉCIMO PRIMERO. En tal virtud, los suscritos coincidimos con el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, que a fin de dar cumplimiento a las demandas de los habitantes del poblado de Tayoltita, municipio de San Dimas, Durango, es necesario elevar al Pleno de este Poder Legislativo, y autorizar al Gobierno del Estado, enajenar en una segunda etapa, las superficies de 13,275.22 m² que corresponde al polígono Uno Norte y 632,592.36 m² al polígono Uno Sur, que sumados dan un total de 645,867.58 m², con el único y primordial propósito de que sean destinados al dominio privado de sus legítimos poseedores, extendiendo el título de propiedad que acredite el derecho que jurídicamente les asiste, a todos aquellos posesionarios que lo acrediten fehacientemente, de conformidad con la legislación civil y los procedimientos de regularización.

DÉCIMO SEGUNDO. Quedan excluidos del área de donación los predios ubicados dentro del polígono Uno Norte y Uno Sur, marcados con el número de lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 con una superficie total de 72,391.13m².

Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que la iniciativa cuyo estudio nos ocupa es procedente, con las adecuaciones realizadas a la misma, lo anterior, con fundamento en lo que dispone el artículo 182 último párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, en virtud de considerar que las mismas, obedecen al mejoramiento de forma y fondo jurídicos. Asimismo, se somete a la determinación de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 FRACCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO, **DECRETA:**

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Durango, la enajenación a título gratuito de una superficie de 645,867.58 m², que se desincorpora de los bienes de dominio privado del Gobierno del



Estado en favor de sus legítimos poseedores, ubicada en la población de Tayoltita, cabecera municipal de San Dimas, Estado de Durango, para la regularización y obtención de sus títulos de propiedad, misma que se encuentra dentro de las siguientes medidas y colindancias:

➤ **Polígono Uno Norte con superficie de 31,279.86 m² ubicado:**

- I. Al Noroeste: del punto 5 al punto 6, con una distancia de 37.22m, con rumbo N 30°36'24" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- II. Al Noroeste: del punto 6 al punto 7, con una distancia de 154.78m, con rumbo N 57°02'18" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- III. Al Suroeste: del punto 7 al punto 8, con una distancia de 51.40m, con rumbo S 53°00'01" O, colindando con Minas de San Luis S.A de C.V.
- IV. Al Suroeste: del punto 8 al punto 9, con una distancia de 247.06m, con rumbo S 14°03'18" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- V. Al Noreste: del punto 9 al punto 5, con una distancia de 293.70m, con rumbo N 58°17'39" E, colindando con Polígono Uno Sur.

➤ **Polígono Uno Sur con superficie de 831,049.03 m² ubicado:**

- I. Al Noroeste: del punto 1 al punto 2, con una distancia de 126.13m, con rumbo N 16°45'05" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- II. Al Noroeste: del punto 2 al punto 3, con una distancia de 367.31m, con rumbo N 08°04'01" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- III. Al Noroeste: del punto 3 al punto 4, con una distancia de 141.99m, con rumbo N 17°12'54" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- IV. Al Noroeste: del punto 4 al punto 5, con una distancia de 173.00m, con rumbo N 30°49'26" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- V. Al Suroeste: del punto 5 al punto 9, con una distancia de 293.70m, con rumbo S 58°17'39" O, colindando con Polígono Uno Norte
- VI. Al Suroeste: del punto 9 al punto 10, con una distancia de 31.12m, con rumbo S 13°56'10" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- VII. Al Suroeste: del punto 10 al punto 11, con una distancia de 537.91m, con rumbo S 18°32'10" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- VIII. Al Suroeste: del punto 11 al punto 12, con una distancia de 78.24m, con rumbo S 38°46'27" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- IX. Al Noroeste: del punto 12 al punto 13, con una distancia de 24.00m, con rumbo N 89°59'58" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- X. Al Suroeste: del punto 13 al punto 14, con una distancia de 39.05m, con rumbo S 39°48'21" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XI. Al Suroeste: del punto 14 al punto 15, con una distancia de 192.26m, con rumbo S 38°14'27" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XII. Al Suroeste: del punto 15 al punto 16, con una distancia de 182.24m, con rumbo S 69°46'31" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XIII. Al Suroeste: del punto 16 al punto 17, con una distancia de 208.39m, con rumbo S 74°41'48" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XIV. Al Noroeste: del punto 17 al punto 18, con una distancia de 26.91m, con rumbo N 41°36'16" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XV. Al Suroeste: del punto 18 al punto 19, con una distancia de 74.93m, con rumbo S 68°28'10" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XVI. Al Suroeste: del punto 19 al punto 20, con una distancia de 40.43m, con rumbo S 60°08'49" O, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.



H. Congreso del Estado
de Durango

LXVI LEGISLATURA 2013-2016

57

OFICIALÍA MAYOR
PROCESO LEGISLATIVO
SESIÓN ORDINARIA
DE LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
03 DE MAYO DE 2016
(10:00) HORAS

- XVII. Al Sureste: del punto 20 al punto 21, con una distancia de 35.53m, con rumbo S 27°01'05" E, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XVIII. Al Sureste: del punto 21 al punto 22, con una distancia de 310.16m, con rumbo S 19°14'00" E, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XIX. Al Sureste: del punto 22 al punto 23, con una distancia de 120.00m, con rumbo S 60°12'34" E, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XX. Al Sureste: del punto 23 al punto 24, con una distancia de 105.24m, con rumbo S 59°51'44" E, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XXI. Al Noreste: del punto 24 al punto 25, con una distancia de 45.76m, con rumbo N 49°56'31" E, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XXII. Al Noreste: del punto 25 al punto 26, con una distancia de 962.25m, con rumbo N 58°41'35" E, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.L.
- XXIII. Al Noreste: del punto 26 al punto 1, con una distancia de 290.04m, con rumbo N 40°23'31" E, colindando con Maderera Industrial de San Dimas S. de R.

Así mismo, quedan excluidos del área de donación los predios ubicados dentro del polígono Uno Norte y Uno Sur, marcados con el número de lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 con una superficie total de 72,391.13m².

ARTÍCULO SEGUNDO. Se designa a la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado para que por conducto de la Dirección de Catastro, sea la dependencia responsable de realizar los trámites correspondientes para la titulación de los lotes motivo de la presente enajenación.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe.

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 26 (veintiséis) días del mes de abril del año 2016 (dos mil dieciséis).

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA:

RÚBRICA

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA

PRESIDENTE

RÚBRICA

DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO

SECRETARIO

RÚBRICA

DIP. JUAN QUIÑONEZ RUIZ

VOCAL

RÚBRICA

DIP. BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ

VOCAL

RÚBRICA

DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA

VOCAL

PRESIDENTE: LA DIPUTADA SECRETARIA ALICIA GARCÍA VALENZUELA,

DARA LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE

ESPECIAL, QUE CONTIENE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL RECINTO LEGISLATIVO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO LA LEYENDA “INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL”.

DIPUTADA ALICIA GARCÍA VALENZUELA: HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión Especial integrada por los CC. Diputados Juan Cuitláhuac Avalos Méndez, Marco Aurelio Rosales Saracco, Beatriz Barragán González, Felipe Francisco Aguilar Oviedo y Felipe Meraz Silva, les fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa suscrita por los CC. Diputados Arturo Kampfner Díaz, Marco Aurelio Rosales Saracco, José Alfredo Martínez Núñez, Felipe Meraz Silva, Juan Quiñonez Ruiz, Israel Soto Peña y Felipe Francisco Aguilar Oviedo en la que proponen la inscripción con letras doradas en el Muro de Honor de este H. Congreso del Estado de la leyenda “Instituto Politécnico Nacional”; por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad con el inciso e) de la fracción V del artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y en atención a la fracción III del artículo 93 así como de los diversos 180, 181, 182, 295 y 296 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente dictamen al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Uno de los pilares básicos para la creación del Instituto Politécnico Nacional fue el astrónomo Luis Enrique Erro, el cual definió a la educación técnica como *“aquella que tiene por objeto adiestrar al hombre en el manejo inteligente de los recursos teóricos y materiales que la humanidad ha acumulado para transformar el medio físico y adaptarlo a sus necesidades”*.

Sin temor a equivocarnos la vida del Instituto Politécnico Nacional constituye un esfuerzo para captar la esencia de la tesis anterior, lo que ha hecho de esta institución una columna fundamental de la educación en México.

SEGUNDO.- Más allá de realizar un recuento histórico del Instituto Politécnico Nacional, esta dictaminadora centra sus trabajos en destacar la importancia del IPN en la historia social y educativa del país, al fin y al cabo las fechas no determinan la grandeza de una institución.

Si bien es cierto, el año de 1936 puede considerarse como el año formal de creación del Politécnico Nacional, no deben olvidarse los esfuerzos previos desarrollados por Narciso Bassols, Juan de Dios Bátiz, Ignacio García Téllez, Wilfrido Massieu, Luis Enrique Erro, Gonzalo Vázquez Vela y Carlos Vallejo Márquez, hombres que trabajaron con altura de miras, hombres que dibujaron un horizonte educativo de calidad.

Tampoco debe olvidarse el año de 1935, donde el Presidente Lázaro Cárdenas del Río al rendir su informe de gobierno ante el Congreso de la Unión señaló que: *La Secretaría de Educación Pública está por terminar durante el presente año, con el propósito de que funcione el próximo, el estudio que organiza el establecimiento de la Escuela Politécnica, cumplimentándose así el Plan Sexenal en lo relativo a que debe darse preferencia a las enseñanzas técnicas que tienden a capacitar al hombre para utilizar y transformar los productos de la Naturaleza, a fin de mejorar las condiciones materiales de la vida humana.”*



En estas aspiraciones, el Instituto Politécnico Nacional ha cumplido con creces este mandato y ha honrado la memoria de esos hombres que dedicaron esfuerzos y sacrificaron intereses personales por la educación.

TERCERO.- Si se examina a conciencia la vida del IPN, sin duda, la encontraríamos como fructífera, la encontraríamos como el semillero de profesionistas técnicos que día a día incorporan y consolidan a nuestro país en el desarrollo tecnológico e industrial.

No puede concebirse, por ejemplo, el desarrollo de la televisión a color sin el genio del egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Guillermo González Camarena.

Historias como la de Evangelina Villegas Moreno que mereció el Premio Mundial de la Alimentación o la de Jesús Kumate Rodríguez que ha dedicado su vida al estudio y la práctica de la salud de los niños, son las que le dan prestigio al Politécnico, son las que convierten al Instituto en un activo indispensable de nuestro desarrollo como Nación.

El IPN es una muestra de lo que la educación pública puede hacer por México, el IPN es claro ejemplo de lo que significa responder a los desafíos del tiempo y sus circunstancias, de igual forma es clara muestra de que la educación pública puede perfeccionarse sin perder conciencia de la historia y el motivo de su creación.

CUARTO.- De aprobarse el presente decreto, quedarán plasmados en el Muro de Honor de este Congreso el idealista y su creación, compartirán espacio Lázaro Cárdenas y el Instituto Politécnico Nacional, ambas piedras fundamentales en el progreso del país.

Sin duda, el politécnico Jesús Robles Martínez puede sentirse orgulloso y reconfortado de que sus palabras *“La técnica al servicio de la Patria”* siguen vigentes, por lo que esta Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango al decretar este homenaje lo hacemos reafirmando las palabras del Presidente Cárdenas *“Con profunda simpatía a las escuelas técnicas que representan la esperanza de un México nuevo”*.

En base a lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión estima que la iniciativa cuyo estudio nos ocupa, es procedente, por lo cual nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación correspondiente en su caso, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Inscribese con letras doradas en el Muro de Honor de este H. Congreso del Estado la leyenda “Instituto Politécnico Nacional”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango.

SEGUNDO.- Comuníquese la aprobación del presente decreto al Gobernador del Estado, al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y



H. Congreso del Estado
de Durango

LXVI LEGISLATURA 2013-2016

60

OFICIALÍA MAYOR
PROCESO LEGISLATIVO
SESIÓN ORDINARIA
DE LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
03 DE MAYO DE 2016
(10:00) HORAS

al Director General del Instituto Politécnico Nacional, a efecto de solicitar su presencia en la Sesión Solemne de inscripción de la leyenda motivo de este Decreto.

TERCERO.- En términos de la fracción III del artículo 55 y de los diversos 65, 296, 298 y 299 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, el Presidente de la Mesa Directiva de esta Legislatura determinara el día y la hora de la Sesión Solemne para el cumplimiento de este Decreto.

CUARTO.- Envíese al Titular del Poder Ejecutivo para los efectos de su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe.

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (03) días del mes de mayo del año 2016 (dos mil dieciséis).

COMISIÓN ESPECIAL
RÚBRICA
JUAN CUITLÁHUAC AVALOS MÉNDEZ
PRESIDENTE
RÚBRICA
MARCO AURELIO ROSALES SARACCO
SECRETARIO
RÚBRICA
BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ
VOCAL
RÚBRICA
FELIPE FRANCISCO AGUILAR OVIEDO
VOCAL
RÚBRICA
FELIPE MERAZ SILVA
VOCAL

PRESIDENTE: CONTINUAMOS CON EL DESAHOGO DEL PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO "PAZ Y LIBERTAD PARA ELEGIR GOBERNADOR, RENOVAR LAS VACANTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DENOMINADA CONGRESO DEL ESTADO, ASÍ COMO SUS 39 AYUNTAMIENTOS", PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS MANUEL RUIZ VALDEZ, POR LO CUAL SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA HASTA POR QUINCE MINUTOS AL DIPUTADO.

DIPUTADO CARLOS MANUEL RUIZ VALDEZ: CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS, DE HACE UNOS DÍAS PARA ACÁ HEMOS SIDO TESTIGOS EN EL ESTADO DE DURANGO DE DENUNCIAS POR LA DESTRUCCIÓN DE BARDAS Y POR LA DESTRUCCIÓN DE PUBLICIDAD INSTALADA EN ESPECTACULARES, ASÍ



COMO LA DESTRUCCIÓN DE LONAS Y TAMBIÉN HEMOS SIDO TESTIGOS DE DENUNCIAS POR UN CONSTANTE HOSTIGAMIENTO A JÓVENES BRIGADISTAS QUE PARTICIPAN EN ESTA CONTIENDA ELECTORAL EN EL ESTADO DE DURANGO, ESTOS ACTOS SIN DUDA PUES HAN GENERADO UNA INDIGNACIÓN GENERAL PORQUE PUES NO SOLAMENTE ENRARECE EL CLIMA ELECTORAL SINO QUE TAMBIÉN HAN CAUSADO DAÑOS CONCRETOS A LOS BIENES DE LOS CIUDADANOS DURANGUENSES ENTONCES ESTO SON ACCIONES DE DELITOS PATRIMONIALES PORQUE AL FINAL DE CUENTAS AFECTAN LA PROPIEDAD DE LOS CIUDADANOS DURANGUENSES, AUNADO A ESTO HEMOS OBSERVADO QUE GRANDES ESCÁNDALOS INICIADOS INCLUSIVE POR DIPUTADOS DE ESTA LEGISLATURA, QUE SEÑALAN IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LOS FONDOS PÚBLICOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ MISMO TAMBIÉN HEMOS SIDO TESTIGOS COMO LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN HAN DADO CUENTA, O HAN INFORMADO A LA SOCIEDAD SOBRE LOS SEÑALAMIENTOS HECHOS POR EL PROPIO TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, Y POR EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO, EN DONDE SEÑALAN LA INTROMISIÓN DEL PERSONAJES EXTERNOS AL ESTADO DE DURANGO Y QUE VIENEN A DESESTABILIZAR O ENRARECER EL CLIMA ELECTORAL EN NUESTRA ENTIDAD FEDERATIVA, NOSOTROS QUISIÉRAMOS ACTUAR CON SUMA RESPONSABILIDAD A EFECTO DE QUE ACTUEMOS COMO AUTORIDAD, PARA QUÉ, PARA QUE LOGREMOS HACER DE QUE ESTA SITUACIÓN LO ÚNICO QUE GENERA ES INCERTIDUMBRE, COMENTARIOS DESACERTADOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DEL MAS ALTO NIVEL DE NUESTRO ESTADO, EN EL



SENTIDO DE GENERAR ZOZOBRA SIN ACUSACIONES DIRECTAS, SIMPLE Y SENCILLAMENTE LANZADAS AL VACÍO SIN CONCRETIZAR A QUÉ PARTIDOS POLÍTICOS ESTÁN APOYANDO ESTOS PERSONAJES, SI ES DE AFUERA O SI ESTÁN AQUÍ EN EL ESTADO DE DURANGO, ESTÁN DE MANERA ILEGAL, ESTÁN HACIENDO ACCIONES QUE COMETEN DE MANERA ILEGAL, DE TAL SUERTE QUE NO ES, NO ES PROPIO QUE LA AUTORIDAD DE ESTE ESTADO SEA QUIEN METE EL RUIDO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SEMBRANDO LA ZOZOBRA Y SEMBRANDO PUES EL ÁNIMO DE SEMBRANDO PUEDE EXISTIR UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA, ME PARECE QUE ES MUY CLARO PARA NOSOTROS QUE LO MÁS FAVORABLE PARA LA DEMOCRACIA, LO MÁS IMPULSABLE POR NUESTRA PARTE PARA QUE SE HAGA A EFECTO EL CAMBIO DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO LAS VACANTES QUE SURJAN DE ESTE PODER LEGISLATIVO Y LOS 39 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO SE GARANTICE LA PAZ, LA TRANQUILIDAD Y LA LIBERTAD DE LOS CIUDADANOS, EL DOMINGO EN EL QUE VAMOS A LLEVAR A CABO LA JORNADA ELECTORAL PUEDA SER INCLUSIVE UN DOMINGO FAMILIAR EN EL QUE SE ACUDA A VOTAR POR LA ELECCIÓN QUE ELLOS HAYAN DECIDIDO, ESTO ES CADA CIUDADANO DECIDA LIBREMENTE A QUIEN VA A RESPALDAR CON SU VOTO, DE TAL SUERTE QUE NOSOTROS QUEREMOS IMPULSAR ESTE PUNTO DE ACUERDO EN EL CUAL ESTAMOS SOLICITANDO DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA QUE INTERVENGA DE MANERA INMEDIATA NO ES POCA COSA LO QUE SUCEDE CUANDO SE DESPIDE CON TAMBORES DESTEMPLADOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, SE DESPIDE CON TAMBORES DESTEMPLADOS Y



LAS CAUSAS QUE SE ALEGAN ES QUE FUERON CAUSAS GRAVES E INCUMPLIMIENTO DE SU FUNCIÓN COMO SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE REFERENCIA, CUÁLES SERÍAN LAS CAUSAS GRAVES, QUE ESCONDÍA DOCUMENTOS QUE ESTABAN DESTINADOS PARA QUE UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL OBSERVARA DETERMINACIONES DE LOS QUEJOSOS, SE DIRÍA QUE ESTABAN FUERA DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL Y QUE ESTABAN ALEJADAS DE LOS PRINCIPIOS QUE DEBEN DE REGIR A UN PROCESO ELECTORAL, NO ES UNA SITUACIÓN MENOR, EH, NO SE TRATA DE UNA TRAVESURA DE LA FUNCIONARIA EN MENCIÓN, SE TRATA DE ACTOS DESTINADOS A CLAUDICAR DERECHOS A CLAUDICAR LIBERTADES DE LOS CIUDADANOS, Y ESA ES UNA SITUACIÓN MUY GRAVE, Y AL FINAL DE CUENTAS HASTA EL DÍA DE HOY, Y DIGO HASTA EL DÍA DE HOY, PORQUE DESDE HACE TRES AÑOS Y MÁS DE TRES AÑOS EXISTÍAN DENUNCIAS CONCRETAS EN CONTRA DE LA ACTUACIÓN DE ESTA FUNCIONARIA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, LA SEÑORA SE DEDICABA A OCULTAR LOS RECURSOS DE DEFENSA INTERPUESTOS POR LOS CIUDADANOS, INTERPUESTOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CON ESO INFLUÍA EN LA EQUIDAD Y LA CONCIENCIA ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A TAL GRADO QUE FUE DESPEDIDA CON TAMBORES DESTEMPLADOS Y OBLIGADA A SALIR POR LA PUERTA TRASERA DEL INSTITUTO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE TAL SUERTE QUE A MITAD DEL PROCESOS ELECTORAL QUE HOY VIVIMOS NO ES UNA SITUACIÓN MENOR EL QUE OCURRAN ESTAS ANOMALÍAS Y QUE TAMBIÉN OCURRAN DENUNCIAS HECHAS POR DIPUTADOS DEL GRUPO MAYORITARIO DE ESTE PODER LEGISLATIVO QUE SEÑALA ACTOS DE CORRUPCIÓN POR DESVÍOS DE



RECURSOS PÚBLICOS DENTRO DEL PROPIO INSTITUTO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, YO CREO QUE LAS NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES NOS PERMITEN A NOSOTROS EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA QUE HAGA EFECTIVO SUS FACULTADES DE ATENCIÓN O DE ATRACCIÓN SEGÚN SEA EL CASO PARA EL EFECTO DE QUE SUBSANE ESTAS ANOMALÍAS QUE SE ESTÁN OBSERVANDO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA ELECTORAL EN EL ESTADO DE DURANGO, ASÍ MISMO TAMBIÉN NOS OTORGA LA FACULTAD PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE PARA QUE LA FEPADE INVESTIGUE ESTOS ACTOS QUE TIENEN QUE VER CON LOS DELITOS DE CARÁCTER ELECTORAL, PERO A LA VEZ NOS FACULTA TAMBIÉN PARA QUE LA FISCALÍA DEL ESTADO INTERVENGA PARA ESCLARECER LOS HECHOS EN LOS QUE ESTÁN INMISCUIDOS LOS BIENES PATRIMONIALES DE LOS CIUDADANOS DURANGUENSES, ESTO ES, EL CONTEXTO ELECTORAL NO EXIME A LOS ACTOS ELECTORALES PARA QUE ESTÉN DENTRO DEL MARCO JURÍDICO DE ESTE PAÍS Y DE ESTE ESTADO, A QUÉ VOY NO SON, PRETEXTO LAS CAMPAÑAS ELECTORALES PARA DECIR QUE TODOS LOS ACTOS TENDRÁN QUE VERSE EN MATERIA ELECTORAL O POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVA EN MATERIA ELECTORAL, NO SEÑOR, CUANDO SE COMETEN ACTOS QUE VIOLAN LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS, CUANDO SE COMETEN ACTOS QUE VULNERAN EL PATRIMONIO DE LOS CIUDADANOS DURANGUENSES, ES MENESTER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES ACTUAR EN COMPETENCIA Y NO LAVARSE LAS MANOS, Y ESCABULLIR LA RESPONSABILIDAD DICHIENDO QUE TIENE QUE SER LA AUTORIDAD ELECTORAL LA QUE RESUELVA SUS INSTANCIAS QUE TIENEN QUE VER



CON DELITOS QUE VAN A AFECTAR EL PATRIMONIO DE LOS DURANGUENSES, DE TAL SUERTE PUES QUE TAMBIÉN EL EXHORTO ES PARA QUE LA FISCAL DEL ESTADO INTERVENGA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y EN RESPETO A LOS DEMÁS DERECHOS Y AL PROCESO ELECTORAL PARA QUÉ, PARA QUE INVESTIGUE ESTOS ACTOS DE DELINCUENCIA QUE TIENEN QUE VER CON LA AFECTACIÓN AL PATRIMONIO DE LOS CIUDADANOS DURANGUENSES, ES INDIGNANTE VER LAS REDES SOCIALES, EL LLANTO DE UNA MADRE DE FAMILIA, UNA CIUDADANA DURANGUENSE QUE FLOTA LA IMPOTENCIA AL DECIR LE AFECTARON EL VEHÍCULO EN EL CUAL SE GANAN EL ALIMENTO DIARIO DE LA FAMILIA, ESO NO TIENE NADA QUE VER CON LO ELECTORAL EH, ES UN ACTO DE DELINCUENCIA QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE TIENE QUE RESOLVER, ASÍ ES AMIGAS Y AMIGOS QUE EL PUNTO DE ACUERDO ESTÁ PLASMADO, ESTÁ SOLICITANDO RESPETUOSAMENTE QUE ESTA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO, DEBE DE SER EL TEXTO TAL CUAL, PARA QUE EXHORTE A ESTAS TRES AUTORIDADES PARA QUE ACTÚEN EN CONSECUENCIA Y QUE NOSOTROS PODAMOS GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS DURANGUENSES LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD DE LOS COMICIOS ELECTORALES, ASÍ MISMO YO AGREGARÍA SEÑOR PRESIDENTE AL PUNTO DE ACUERDO PEDIRLE A LAS AUTORIDADES DE ESTE PAÍS, PERDÓN DE ESTE ESTADO PARA QUE SE ABSTENGAN DE HACER COMENTARIOS QUE ENRARECEN EL CLIMA ELECTORAL, DENUNCIAR POR PARTE DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA LA INTROMISIÓN DE ACTORES AJENOS AL ESTADO DE DURANGO PUES PRIMERAMENTE QUE SEÑALE, ESPECIFIQUE A QUIEN DEBEN APOYAR Y



SI ESTÁN AQUÍ CUÁLES SON LOS ACTOS QUE HAN DETECTADO QUE ESTÁN FUERA DEL MARCO LEGAL, Y QUE SON PROHIBIDOS PARA EJECUTARSE Y QUE ACTÚE EN CONSECUENCIA, DE TAL SUERTE PUES QUE AMIGAS Y AMIGOS QUE SE TRATA DE HACER UNA ACCIÓN DETERMINANTE Y CONTUNDENTE POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA EFECTO DE GARANTIZAR LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD DE LOS COMICIOS EN EL ESTADO DE DURANGO, ES CUANTO SEÑOR PRESIDENTE.

PRESIDENTE: SE ABRE EL REGISTRO DE ORADORES A FAVOR, EN CONTRA O EN ABSTENCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO.

PRESIDENTE: DE NO HABER MÁS INTERVENCIONES, SE INSTRUYE, A LA DIPUTADA SECRETARIA ALICIA GARCÍA VALENZUELA, PARA QUE LE DÉ LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO.

DIPUTADA ALICIA GARCÍA VALENZUELA: CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE, PUNTO DE ACUERDO, PRIMERO.- ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUCIONAL ELECTORAL, CON EL FIN DE QUE INTERVENGA DE MANERA INMEDIATA, CONTUNDENTE Y EFICAZ EN RESOLVER LAS GRAVES ANOMALÍAS QUE SE HAN PRESENTADO EN EL DESARROLLO PROCESO DE DURANGO.

SEGUNDO.- ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS



H. Congreso del Estado
de Durango

LXVI LEGISLATURA 2013-2016

67

OFICIALÍA MAYOR
PROCESO LEGISLATIVO
SESIÓN ORDINARIA
DE LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
03 DE MAYO DE 2016
(10:00) HORAS

ELECTORALES (FEPADE), CON EL FIN DE QUE SE INVESTIGUE A LA MAYOR BREVEDAD LOS HECHOS RELACIONADOS CON LOS DAÑOS OCASIONADOS EN LA PROPAGANDA DE CANDIDATOS PINTADAS E INSTALADAS EN BARDAS DE PARTICULARES EN EL ACTUAL PROCESO ELECTORAL.

TERCERO.- ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DURANGO A EFECTO DE QUE SE INVESTIGUE A LA MAYOR BREVEDAD LOS DAÑOS OCASIONADOS A PARTICULARES EN BARDAS Y VEHÍCULOS PROPIEDAD DE PARTICULARES.

DURANGO, DGO., A 25 DE ABRIL DE 2016, DIPUTADO CARLOS MANUEL RUIZ VALDEZ, ES CUANTO SEÑOR PRESIDENTE.

PRESIDENTE: SE SOMETE A VOTACIÓN EL PUNTO DE ACUERDO EN FORMA ECONÓMICA, PARA LO CUAL LOS DIPUTADOS TIENEN HASTA UN MINUTO PARA EMITIR SU VOTO.

PRESIDENTE: SE CIERRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE VOTACIÓN, Y SE INSTRUYE AL DIPUTADO SECRETARIO PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO, PARA QUE DE A CONOCER EL SENTIDO DE LOS VOTOS A ESTA PRESIDENCIA.

Diputado	Sentido
JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX	En contra
FELIPE DE JESÚS ENRIQUEZ HERRERA	A favor
LUIS FERNANDO SOTO JACQUEZ	En contra
ROSAURO MEZA SIFUENTES	En contra
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ VÁZQUEZ	En contra
EUSEBIO CEPEDA SOLIS	En contra
JULIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ	



H. Congreso del Estado
de Durango

LXVI LEGISLATURA 2013-2016

68

OFICIALÍA MAYOR
PROCESO LEGISLATIVO
SESIÓN ORDINARIA
DE LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
03 DE MAYO DE 2016
(10:00) HORAS

FELIPE FRANCISCO AGUILAR OVIEDO	
JOSÉ MANUEL GALLEGOS RANGEL	En contra
JUAN CUITLÁHUAC AVALOS MÉNDEZ	En contra
MARÍA DEL CARMEN VILLALOBOS V	En contra
EDUARDO SOLIS NOGUEIRA	En contra
BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ	En contra
ANAHEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ	En contra
JUAN QUIÑONES RUIZ	A favor
MARTÍN HERNÁNDEZ ORTÍZ	En contra
PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO	En contra
ARTURO KAMPFNER DÍAZ	En contra
CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA	
LUIS IVÁN GURROLA VEGA	En contra
OCTAVIO CARRETE CARRETE	En contra
ALICIA GARCIA VALENZUELA	En contra
JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ	
JULIÁN SALVADOR REYES	En contra
ISRAEL SOTO PEÑA	A favor
LÁZARO HERRADA GONZÁLEZ	En contra
CARLOS MANUEL RUIZ VALDEZ	A favor
MARCO AURELIO ROSALES SARACCO	En contra
FELIPE MERAZ SILVA	En contra

DIPUTADO PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO: CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA, LE INFORMO QUE SON CUATRO VOTOS A FAVOR, VEINTIUNO EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES.

PRESIDENTE: GRACIAS DIPUTADO, SE DESECHA EL PUNTO DE ACUERDO.

PRESIDENTE: ENTRAMOS AL TEMA DE ASUNTOS GENERALES, PARA LO CUAL, HAGO DEL CONOCIMIENTO DEL PLENO, QUE ANTE ESTA PRESIDENCIA SE REGISTRARON LOS SIGUIENTES ASUNTOS CON EL TEMA DENOMINADO “TEMPORADA DE ESTIAJE”, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LÁZARO HERRADA GONZÁLEZ; CON EL TEMA DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” PRESENTADO POR EL DIPUTADO FELIPE DE JESÚS ENRÍQUEZ HERRERA Y CON EL TEMA DENOMINADO

“PROTECCIÓN” PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN VILLALOBOS VALENZUELA.

PRESIDENTE: SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA HASTA POR QUINCE MINUTOS PARA EL DESAHOGO DEL PRONUNCIAMIENTO AL DIPUTADO LÁZARO HERRADA GONZÁLEZ.

DIPUTADO LÁZARO HERRADA GONZÁLEZ: CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS, SEÑORAS Y SEÑORES, RECORDARÁN LA TERRIBLE SEQUÍA QUE VIVIMOS HACE ALGUNOS AÑOS EN NUESTRO ESTADO Y PORQUÉ MENCIONO ESTO, SE PREGUNTARÁN USTEDES PORQUE ES PRECISAMENTE EN ESTA ÉPOCA DE CALOR EN LA QUE SE PRESENTAN ESTE TIPO DE SITUACIONES SE ACERCA LA TEMPORADA DE ESTIAJE MISMA QUE SE PRESENTA AÑO CON AÑO HACIÉNDOSE NOTORIA LA ESCASEZ DE AGUA TANTO PARA EL GANADO COMO PARA EL CONSUMO DE LA POBLACIÓN DE ENTRE LAS REGIONES DE LA ENTIDAD QUE DE MANERA TRADICIONAL ENFRENTAN MÁS PROBLEMAS CON EL ABASTO DEL AGUA ESTÁ LA REGIÓN LAGUNERA Y DENTRO DE ELLA LOS MUNICIPIOS DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, SAN JUAN DE GUADALUPE Y SANTA CLARA, EN ESTE SENTIDO QUIERO RESALTAR LA LABOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE HOY DURANGO ESTÉ PREPARADO DESDE HACE TIEMPO CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA HACER FRENTE A LA TEMPORADA DE ESTIAJE LA CUAL REPRESENTA UNA ÉPOCA MUY COMPLICADA PARA EL CAMPO POR LO QUE YA SE TIENE PREVISTA LA ENTREGA DE ALGUNOS APOYOS A LOS PRODUCTORES ADEMÁS DE QUE SE HARÁ USO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE SE TIENE PARA EL



ALMACENAMIENTO DEL AGUA Y SE APOYARÁ A LAS COMUNIDADES QUE LO NECESITEN, LLEVANDO EL VITAL LÍQUIDO EN PIPAS ES DE DESTACAR QUE SE IMPLEMENTARÁN ACCIONES DE MANERA COORDINADA ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PARA QUE LA DEPENDENCIA ESTÉ PENDIENTE DE LLEVAR EL VITAL LÍQUIDO EN PIPAS HASTA LOS MUNICIPIOS MENCIONADOS EN EL MOMENTO QUE ASÍ SE REQUIERA ADEMÁS EN LOS MUNICIPIOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE ESPECIALMENTE EN SAN JUAN DE GUADALUPE HOY SE CUENTA CON UNA GRAN INFRAESTRUCTURA GRACIAS AL APOYO DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO DE TAL MANERA QUE EN MUCHAS CASAS Y ESCUELAS SE TIENEN DEPÓSITOS PARÁ EL ALMACENAMIENTO PARA QUE SE PUEDA GARANTIZAR EL ABASTO DEL AGUA ELEMENTO NECESARIO PARA EL USO DE LAS FAMILIAS EN SU VIDA COTIDIANA, EN LA REGIÓN DEL SEMI DESIERTO HOY EN DÍA TAMBIÉN SE CUENTA CON 49 PRESAS DE MAMPOSTERÍA QUE AYUDARÁN EN MUCHO EN ESTA ÉPOCA ASÍ COMO 120 POZOS NUEVOS QUE SE HICIERON PARA EL GANADO POR OTRA PARTE LA TEMPORADA DE ESTIAJE NO SÓLO AFECTA AL CAMPO TAMBIÉN A LAS ZONAS URBANAS POR LO QUE LAS AUTORIDADES DE NUESTRO ESTADO SE HAN DECLARADO PREPARADAS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN QUE PODRÍA SUFRIR DESABASTO DE AGUA SOBRE TODO EN LA ZONA NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE DURANGO YA QUE SE CUENTA CON DOS FUENTES DE ABASTECIMIENTO QUE REGULARMENTE SE PONEN EN LÍNEA PARA REFORZAR EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y CON ELLO AMORTIGUAR EL INCREMENTO EN LA DEMANDA DURANTE LA TEMPORADA DE CALOR QUE ES DEL 15 AL 20% EL TEMA DEL AGUA ES MUY COMPLEJO Y ES NECESARIO ESTAR AL



H. Congreso del Estado
de Durango

LXVI LEGISLATURA 2013-2016

71

OFICIALÍA MAYOR
PROCESO LEGISLATIVO
SESIÓN ORDINARIA
DE LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
03 DE MAYO DE 2016
(10:00) HORAS

PENDIENTE DE LA OPERACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD ES POR ESO QUE DURANTE LA TEMPORADA DE INVIERNO SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO DE LOS POZOS Y EN ESTE MOMENTO SE TRABAJA AL 100% EN LOS CENTROS DE ABASTECIMIENTO ESTE DÍA HAGO EL EXHORTO DESDE ESTA LA MÁS ALTA TRIBUNA DEL ESTADO PARA QUE LA CIUDADANÍA HAGA UN USO MÁS EFICIENTE DEL AGUA Y EVITE EL DESPERDICIO YA QUE EN ESTA ÉPOCA DE MANERA NATURAL AUMENTA SU GASTO Y SU CONSUMO POR SU ATENCIÓN GRACIAS, ES CUANTO SEÑOR PRESIDENTE.

PRESIDENTE: SE PREGUNTA A LA ASAMBLEA ¿SÍ ALGÚN DIPUTADO DESEA HACER USO DE LA PALABRA?

PRESIDENTE: AL NO HABER NINGUNA INTERVENCIÓN SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA HASTA POR QUINCE MINUTOS PARA EL DESAHOGO DEL PRONUNCIAMIENTO AL DIPUTADO FELIPE DE JESÚS ENRÍQUEZ HERRERA.

DIPUTADO FELIPE DE JESÚS ENRÍQUEZ HERRERA: CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS, HAGO USO DE ESTA TRIBUNA PARA PRONUNCIARME EN DIVERSOS ASUNTOS QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA POBLACIÓN DE DURANGO, HAGO DEL CONOCIMIENTO PRECISAMENTE DE LA CIUDADANÍA DURANGUENSE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES HE DICHO QUE UNO DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA LOGRAR EL CRECIMIENTO Y AÚN MÁS EL DESARROLLO DE DURANGO Y DE NUESTRO PAÍS ES QUE



SUS GOBIERNOS OPEREN EN CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES EN EL MARCO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LAS LEYES Y NORMAS QUE PROMUEVAN EL BUEN DESEMPEÑO, ENTENDIENDO POR TAL EL MANEJO DE RECURSOS CON HONESTIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, EN EL TRABAJO QUE COMO MANDATARIOS LES TIENE ENCOMENDADO EL PUEBLO Y BUSCAR CON CALIDAD EL MEJOR SERVICIO A LA POBLACIÓN Y HAY DOS FANTASMAS LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD Y QUE PRECISAMENTE ESTÁN RELACIONADOS CON EL TEMA QUE EN LA SIGUIENTE SESIÓN VAMOS A TRATAR DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO, EN ARMONIZACIÓN CON LA LEY GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR ESO NO PUEDO DEJAR DE PASAR Y COMENTAR QUE LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN ES UN PENDIENTE QUE SIGUE SIN CONCRETARSE SE HA PRESUMIDO MUCHO LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE DURANGO APROBADA EN 2013 PRECISAMENTE AL INICIO DE ESTA LEGISLATURA EN LA QUE SE PLANTEÓ CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL ANTICORRUPCIÓN PERO QUE NO HUBO LA VOLUNTAD, LA DECISIÓN FIRME DE LLEVARLA A CABO POR LO QUE SE SOMETIÓ SU EXISTENCIA A UN ARTÍCULO TRANSITORIO QUE LA HIZO DEPENDER DE UNA REFORMA FEDERAL Y ESO FUE UN ERROR ES DECIR LA PARTE FEDERAL SE ANCLÓ A ESA PARTE FEDERAL Y QUE DE ALLÁ VINIERA UN SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN PORQUE DESDE EL EJERCICIO DE NUESTRA SOBERANÍA DEBIMOS DE HABER PUESTO EL EJEMPLO Y NO SUJETARNOS TEMEROSAMENTE A LOS VAIVENES DE LA POLÍTICA NACIONAL Y SI HABLAMOS DE POLÍTICA NACIONAL ENCONTRAMOS QUE EL PRESIDENTE PEÑA NIETO PROMETIÓ EN SU CAMPAÑA Y DESPUÉS



COMO PRESIDENTE VOLVIÓ A REITERAR QUE SU PRINCIPAL PROMESA DE CAMPAÑA ERA CREAR UNA COMISIÓN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN QUE DESPUÉS CONCEPTUALIZÓ CON MAYOR AMPLITUD COMO UN SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN LO CIERTO ES QUE YA VAMOS RUMBO YA VA RUMBO AL FINAL DEL SEXENIO Y ESA REFORMA TAN NECESARIO TAN IMPORTANTE Y TAN DEMANDADA PARA LA SOCIEDAD ENFRENTA GRAVES RESISTENCIAS QUE SURGEN DE LOS MISMOS GRUPOS EN EL PODER PARTICULARMENTE EL PRI Y EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA, DIRÁN HAY ARGUMENTOS SIMPLISTAS DE QUE LE FALTÓ LA COMA DE QUE POR AHÍ HAY CIERTAS DISPOSICIONES QUE NO AYUDAN ETCÉTERA, ESPEREMOS QUE PRONTO A TRAVÉS DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA, LA CÁMARA DE DIPUTADOS YA SE APRUEBE ESE SISTEMA QUE POR CIERTO LE FALTA MUCHA COERCITIVIDAD MUCHAS DISPOSICIONES QUE EN SU MOMENTO LAS VOLVERÉ A SEÑALAR SE HA LLEGADO AL GRADO DE QUE RECIENTEMENTE EL PRESIDENTE, EX PRESIDENTE NACIONAL Y COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SEÑALÓ PROPUSO OTORGAR EL PERDÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN COMETIDO DESVÍOS DE RECURSOS PÚBLICOS COMO DICE TEXTUALMENTE LA NOTA INFORMATIVA, LOS PRIÍSTAS PLANTEAN QUE SI EL SERVIDOR PÚBLICO DEVUELVE LOS RECURSOS SEA PERDONADO Y SI NO FUE POSIBLE RECUPERAR ESTOS O COMPROBAR SU DESTINO SE PROCEDA CON FINCAR RESPONSABILIDADES FÍJENSE EL SEÑALAMIENTO Y EN OTROS DISCURSOS DICE QUE ESTÁ A FAVOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y QUIEN LO SEÑALÓ, QUIEN LO MENCIONÓ, ESO HAY QUE LEERLO EN EL ÓRALE QUÉ CHIQUITO AHÍ Y A NIVEL NACIONAL HAY OTROS PERIÓDICOS IMAGÍNENSE USTEDES



CUANDO UN CIUDADANO POR NECESIDAD, POR CIERTO HAGO UN SEÑALAMIENTO AQUÍ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y A LA MESA DIRECTIVA QUE SE PROCEDA A DICTAMINAR LA INICIATIVA QUE HE PRESENTADO EN RELACIÓN AL ROBO FAMILIAR Y QUE ESTÁ RELACIONADO CON LO QUE VOY A MENCIONAR IMAGÍNESE USTEDES CUANDO UN CIUDADANO POR NECESIDAD EXTREMA, POR HAMBRE, POR POBREZA ROBA COMIDA EN ALGUNA TIENDA TODO EL PESO DE LA LEGISLACIÓN PENAL CAE SOBRE ÉL Y LE IMPONEN AÑOS DE CÁRCEL Y ESO SI EL SISTEMA JURISDICCIONAL, EL SISTEMA JUDICIAL ES MUY EXPEDITO, ES MUY RÁPIDO, MUY EFICIENTE, EN CONTRASTE UN SERVIDOR PÚBLICO QUE TIENE UN BUEN SALARIO QUE PROTESTO HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY QUE PROTESTA CUMPLIR CON ESOS ORDENAMIENTOS QUE CONOCE CUÁLES SON SUS OBLIGACIONES Y QUE TIENE COMO MANDAMIENTO PRINCIPAL NO HACER MAL USO DE LOS RECURSOS, NO DESVIAR AFINES QUE NO SON ESTRICTAMENTE PARA LA FUNCIÓN QUE LE FUE ENCOMENDADA EN SÍ NO ROBAR ESE SERVIDOR PÚBLICO SE LE PERMITE ROBAR O DESVIAR RECURSOS Y SI REGRESA SEGÚN EL PRESIDENTE EL LÍDER DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI DICE QUE SI REGRESA ESO QUE SE LLEVÓ SE LE PERDONA CONTRA TODO PRINCIPIO PENAL EL DOLO, LA MALA FE, EL DAÑO PATRIMONIAL A LA HACIENDA PÚBLICA, AL PUEBLO EN SÍ ESTO NOS DA UNA IDEA CLARA DE QUE NO HAY VOLUNTAD DE AVANZAR EN ENFRENTAR ESTE GRAVE PROBLEMA QUE NO SÓLO AFECTA LAS FINANZAS PÚBLICAS LA CORRUPCIÓN SE TRADUCE TAMBIÉN EN MALAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS EN LA PARALIZACIÓN O SEMIPARALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESTATAL Y NACIONAL EN NO CREER EN UN SISTEMA ECONÓMICO EN UN SISTEMA



DE JUSTICIA ESO PROVIENE TAMBIÉN Y EN DAÑO GRAVE ES HACIENDA PÚBLICA SIN DUDA DERIVADO DE LA CORRUPCIÓN Y TAMBIÉN DE LA IMPUNIDAD, LA CORRUPCIÓN TIENE ENTONCES NO SON UN ALTO COSTO SINO GRAVES CONSECUENCIAS POR ESO RELACIONADO CON ESTE TEMA SE A FIRMADO EL DECRETO DE PROMULGACIÓN DE LA LEY DE FINANCIERA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO Y DE INSTRUMENTOS UN INSTRUMENTO JURÍDICO QUE PROMETE DAR EN MATERIA DE FINANZAS PÚBLICAS A NUESTRO PAÍS Y QUE ESPEREMOS QUE SEA OBSERVADA POR LAS DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EN EL CASO DE DURANGO QUE HA SUFRIDO YA DE AUMENTOS MUY ALTOS EN SU ENDEUDAMIENTO PÚBLICO DE ACUERDO A NUESTRAS CIFRAS DEL GOBIERNO ESTATAL ACTUAL HA DUPLICADO LA DEUDA PÚBLICA ACTUALMENTE ESTE CONGRESO AUTORIZADO \$ 6,045.7 MILLONES DE PESOS EN MENOS DE TRES AÑOS Y ESPEREMOS QUE NO HAYA MÁS ACUMULACIÓN EN EL RESTO DE ESTA LEGISLATURA COMO YA DENUNCIAMOS LA APROBACIÓN DE ESTOS CRÉDITOS SE DIO SIN PRECISAR Y JUSTIFICAR PUNTUALMENTE Y EXPRESAMENTE CUÁLES SON LOS CONCEPTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE DEBERÍAN DE HABER JUSTIFICADO ESTE ENDEUDAMIENTO RECORDEMOS QUE NUESTRA PREOCUPACIÓN CENTRAL DEBE SER JUSTIFICAR SOCIAL Y TÉCNICAMENTE CUALQUIER PESO QUE SE UTILICE EN ESTA NUEVA LEY APLICA LA SALIDA, DE SALIDA A UN GOBIERNO ESTATAL QUE YA VA DE SALIDA Y QUE NO SUPO JUSTIFICAR ESE ENDEUDAMIENTO QUE HEREDA LAS PRÓXIMAS GENERACIONES A 30 AÑOS EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DE LEYES QUE TIENEN QUE VER CON DURANGO DEBO DE RECRIMINAR A LA MAYORÍA DE ESTE CONGRESO DEL PRI NO HABER APROBADO UN



PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTÉ PARA SOLICITAR QUE NUESTRA ENTIDAD POR TENER EVIDENTES REZAGOS Y SER CONSIDERADO INCLUSO UNA EX GOBERNADOR EL DE INMEDIATO ANTERIOR QUE SER EL CHIAPAS DEL NORTE ASÍ LO MENCIONÓ LA ENTIDAD EL NORTE DEL PAÍS MÁS ATRASADA Y POBRE FUERA CONSIDERADA COMO UNA ZONA ESPECIAL SE PRESENTÓ LA GRAN OPORTUNIDAD DE QUE DURANGO SE INCLUYERA COMO UNA ZONA ESPECIAL, UNA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL CON TODOS LOS BENEFICIOS E INVERSIONES EXENCIONES Y FACILIDADES QUE ELLO IMPLICA Y ESTO LO COMENTO PORQUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN CONCLUYÓ EL PROCESO DE LEGISLACIÓN DE LA NUEVA LEY FEDERAL DE ZONAS ESPECIALES PARA ENVIARSE AL EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR ES LAMENTABLE QUE AQUÍ NO SE HAYA QUERIDO NI SIQUIERA HACER EL INTENTO DE PEDIR QUE DURANGO SE INCLUYERA EN ESTAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, COMO SI SE CUIDARA EL QUÉ DIRÁN DE NOSOTROS PODER RECONOCER NUESTROS REZAGOS ES DECIR ESTAS ZONAS ESPECIALES LE APLICABA PRECISAMENTE A DURANGO Y ES QUE ESTA LEY ES UN INSTRUMENTO PARA DETERMINAR ZONAS ESPECIALES DEL PAÍS PARA AYUDARLE A CREAR CONDICIONES Y FACILIDADES PARA ABATIR LA DESIGUALDAD PARA CERRAR LAS BRECHAS DE DESARROLLO REGIONAL Y PROMOVER UN DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE PRECISAMENTE LAS REGIONES DEL PAÍS CON MAYOR REZAGO ECONÓMICO Y SOCIAL Y DURANGO HUBIERA QUEDADO MUY BIEN EN ESTE PERFIL COMO SE EVIDENCIA CON LOS INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES SEGÚN CIFRAS OFICIALES DADAS SUS CIFRAS DE NO CRECIMIENTO Y TAMBIÉN DE POBREZA QUE PADECEN



LA MAYORÍA DE DURANGUENSES PARTICULARMENTE EN LAS ZONAS SERRANAS E INDÍGENAS DE NUESTRA ENTIDAD VALGA ESTA RECRIMINACIÓN A ESTE CONGRESO QUE NO INTENTÓ POR LO MENOS QUE DURANGO FUERA CONSIDERADO COMO DENTRO DE ESTA LEY COMO DENTRO DE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DE MANERA EXPRESA Y OBVIAMENTE QUE ESTO NO ES UN TEMA MENOR, ACASO DURANGO NO TIENE DERECHO A ESOS APOYOS SE MENCIONA MUCHO EN EL DISCURSO OFICIAL QUE SE GESTIONAN RECURSOS QUE VIENEN RECURSOS MÁS PARA DURANGO PUES ESTAR UNA GRAN OPORTUNIDAD DE QUE SE AYUDARA REALMENTE A DURANGO CON UNA BUENA GESTIÓN DE RECURSOS CONSIDERANDO ESA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL Y TAMBIÉN LA FEDERACIÓN PARTICULARMENTE EL PRESIDENTE PEÑA NIETO PUES MUCHO SE HABLA QUE APOYA A DURANGO PORQUÉ NO CONSIDERARON ESA ZONA ESPECIAL A DURANGO QUEDA EN EL DISCURSO A CABO ACABA DE PASAR EL DÍA DEL NIÑO Y SEGÚN CIFRAS RECIENTES EXISTEN EN MÉXICO MÁS DE 21 MILLONES DE NIÑOS EN POBREZA, PEQUEÑITOS QUE SUFREN CONDICIONES DE MISERIA DE LA QUE NOS ES AJENA LA NIÑEZ DE DURANGO DONDE NOS PROPORCIONAN DATOS TAN TERRIBLES COMO QUE EXISTEN MÁS DE 42,000 INFANTES DURANGUENSES TENIENDO QUE TRABAJAR EN UNA EDAD DONDE DEBERÍAN DE ESTAR CONCENTRADOS EN DIVERTIRSE, EN JUGAR EN TENER UN DESARROLLO SANO Y PODER IR A LA ESCUELA TENER UN INFANCIA EN ESTAS CONDICIONES ADEMÁS DE MALO ES CONDENAR SU FUTURO AL FRACASO Y LA MARGINACIÓN NO PODEMOS SACAR ADELANTE NUESTRAS SOCIEDADES SI NO CONSIDERAMOS COMO PRIORIDAD A NUESTROS PEQUEÑOS PARA GARANTIZARLES UN FUTURO CON



MAYORES OPORTUNIDADES Y QUE VIVAN EN CONDICIONES DIGNAS DICHO TODO LO ANTERIOR CREO QUE NOS HA FALTADO COMO CONGRESO VOLUNTAD PARA ENFRENTAR CON DECISIÓN ESE FANTASMA CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD Y QUE VA DE LA MANO CON TRANSPARENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS NOS HA FALTADO VOLUNTAD A TRAVÉS DE INTERÉS PARA GESTIONAR MEJORES CONDICIONES DE DESARROLLO PARA DURANGO, ESPEREMOS EN ESTOS ÚLTIMOS MESES, YA TERMINO PRESIDENTE, ESPEREMOS QUE EN ESTOS ÚLTIMOS MESES EXISTE UNA VOLUNTAD DISTINTA EN ESTE CONGRESO Y SE HAGA LO QUE NO SE HA HECHO EN FAVOR DE DURANGO Y A FAVOR DE LOS DURANGUENSES POR SU ATENCIÓN GRACIAS, ES CUANTO PRESIDENTE.

PRESIDENTE: PREGUNTO A LA ASAMBLEA ¿SI ALGÚN DIPUTADO DESEA HACER USO DE LA PALABRA? CON QUÉ OBJETO DIPUTADO, TIENE LA PALABRA HASTA POR CINCO MINUTOS.

DIPUTADO CARLOS MANUEL RUIZ VALDEZ: CON SU PERMISO COMPAÑERO PRESIDENTE, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS, LO QUE ACABA DE COMENTAR EL DIPUTADO ENRÍQUEZ PUES TIENE RELACIÓN DIRECTA CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE SOBERANO DE DURANGO, DICE DE TODA PERSONA TIENE DERECHO A DISPONER DE BIENES Y SERVICIOS Y DE OPTIMA CALIDAD ASÍ COMO A UNA INFORMACIÓN PRECISA Y LIBRE DE ENGAÑO O MANIPULACIÓN SOBRE SU CONTENIDO Y SUS CARACTERÍSTICAS, DICE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 29 QUE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN ESTÁ GARANTIZADO EN LOS



TÉRMINOS DE LA PRESENTE CONSTITUCIÓN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y QUE ESTE DERECHO A LA INFORMACIÓN SE RIGE POR ALGUNOS PRINCIPIOS ENTRE ELLOS EL PRIMERO QUE MARCA EL ARTÍCULO 29 ES QUE TODA LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL ES PÚBLICA DE TAL SUERTE QUE LO QUE HIZO REFERENCIA EL DIPUTADO ENRÍQUEZ EN RELACIÓN A EL COMITÉ ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE DURANGO QUE TIENE QUE VER CON LA LEY ANTICORRUPCIÓN QUE SE CREA EN EL ESTADO DE DURANGO PARA QUE PARA EL EFECTO DE GARANTIZAR ESE CONSEJO PUES LA VERDAD ES QUE SUFRE EL MISMO DESTINO, QUE SUFRE EL INSTITUTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y QUE SON TEMAS QUE LES DAN PACHORRA A MIS COMPAÑEROS DIPUTADOS Y QUE LES CAUSA COMO QUE DESINTERÉS PORQUE SON TEMAS QUE PARA ELLOS NO TIENEN LA IMPORTANCIA DE ESTARSE VIENDO EN UNA SESIÓN DE PLENO, PERO QUE TIENE QUE VER CON ESOS TRUQUILLOS QUE SON ESAS SITUACIONES DE AMBIGÜEDAD Y DE ENGAÑO QUE HACE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE DURANGO CUANDO DICE QUE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN UN TRANSITORIO DE ESA MISMA LEY DICE QUE ENTRARÁ EN VIGOR DOS AÑOS DESPUÉS DE QUE USTEDES LA AUTORIZARON, PERO LUEGO PUES EL DESTINO LOS ALCANZÓ Y SE CUMPLIERON LOS DOS AÑOS LO QUE HACEN INMEDIATAMENTE ES ELIMINAR EL TRANSITORIO QUE HABLABA DE LOS DOS AÑOS Y SE CAMBIA Y DICE AHORA QUE LA LEY ENTRARA EN VIGOR UNA VEZ QUE ÉSTA SEA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PUES BIEN QUÉ SUCEDE QUE EL



H. Congreso del Estado
de Durango

LXVI LEGISLATURA 2013-2016

80

OFICIALÍA MAYOR
PROCESO LEGISLATIVO
SESIÓN ORDINARIA
DE LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
03 DE MAYO DE 2016
(10:00) HORAS

PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO HA PUBLICADO EL DECRETO, PERO AL PREGUNTARLE AL PERIÓDICO OFICIAL ¿POR QUÉ? RESPONDEN ELLOS QUE PORQUE EL CONGRESO DEL ESTADO NO HA ENVIADO EL DECRETO PARA SU PUBLICACIÓN, SI SE CAPTA EL ENGAÑO LA SIMULACIÓN POR PARTE DE ESTE PODER LEGISLATIVO HACIA CON LOS CIUDADANOS, NO ESTAMOS JUGANDO DONDE ESTÁ EL DECRETO PARA QUE SEA PUBLICADO Y QUE PUEDA INICIARSE CON EL ASUNTO DE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, ENTONCES PUES SE TRATA DE RESPETAR LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27 TODA PERSONA TIENE DERECHO A UNA INFORMACIÓN PRECISA LIBRE DEL ENGAÑO O MANIPULACIÓN SOBRE SU CONTENIDO Y SUS CARACTERÍSTICAS NO ES UNA COSA MENOR SE TRATA DE LA CONDUCTA HONESTA CUANDO SE EMITE ALGÚN DECRETO PARA QUE NO SE PIERDA DE AQUÍ A DONDE ESTÁ LA IMPRENTA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LUEGO SE ECHEN LA CULPA QUE EL CONGRESO NO LA HA ENVIADO Y QUE EL RESPONSABLE DEL PERIÓDICO OFICIAL NO LO HA PUBLICADO, ES CUÁNTO.

PRESIDENTE: PREGUNTO A LA ASAMBLEA ¿SI ALGÚN OTRO DIPUTADO QUIERE HACER USO DE LA PALABRA?

PRESIDENTE: DE NO SER ASÍ SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA HASTA POR QUINCE MINUTOS PARA EL DESAHOGO DE SU PRONUNCIAMIENTO A LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN VILLALOBOS VALENZUELA.



DESDE SU LUGAR LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN VILLALOBOS VALENZUELA MANIFIESTA: SEÑOR PRESIDENTE SOLICITO SE TRANSCRIBA MI INTERVENCIÓN EN EL ACTA CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO LA ENTREGO A LA MESA DIRECTIVA.

PRESIDENTE: SOLICITÓ A OFICIALÍA MAYOR SE AGREGUE A LA ACTA EL PRONUNCIAMIENTO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN VILLALOBOS VALENZUELA.

DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN VILLALOBOS VALENZUELA: CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS, HAGO USO DE ÉSTA ALTA TRIBUNA EN ÉSTE DÍA, PARA TOCAR UN TEMA COYUNTURAL PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS, Y PARA NUESTRO QUERIDO DURANGO: “LA INCLUSIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA VIDA PRODUCTIVA DEL ESTADO” Y LA CONCIENTIZACIÓN DE LAS FAMILIAS “AL NO DESAMPARO DE SUS ADULTOS MAYORES”, VA MUY ACORDE LA PRIMERA DE LAS VERTIENTES, SOBRE LAS CUALES SE DESAHOGARÁ EL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO, CON EL RECIENTE FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJO, ÉSTE PASADO 1º DE MAYO, NO DEBE PASAR DESAPERCIBIDO QUE ÉSTE SECTOR, SE ENCUENTRA AÚN EN NUESTROS DÍAS, DENTRO DE UN ESTADO DE VULNERABILIDAD, SI BIEN, EN TORNO A LA MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL, SE LLEVAN A CABO ACCIONES TENDIENTES A OTORGARLES APOYOS, BIEN DE CORTE ECONÓMICO, O TRATANDO DE GENERAR ESPACIOS PARA EL ADULTO MAYOR, PARA SU INCLUSIÓN DENTRO DEL MARCO LABORAL, QUEDA MUCHO POR HACER Y CONSTRUIR EN BENEFICIO DE ESTE IMPORTANTE SECTOR SOCIAL, PRIMERO, SE DEBE TOMAR COMO



PUNTO DE PARTIDA QUE EL ENVEJECIMIENTO, ES UN FENÓMENO NATURAL, Y DE CARÁCTER MUNDIAL, NO PRIVATIVO DE UNOS CUANTOS. LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (ONU) ESTIMA QUE EXISTEN 600 MILLONES DE PERSONAS QUE CUENTAN CON UNA EDAD SUPERIOR A LOS SESENTA AÑOS, Y QUE EXISTE LA PROBABILIDAD DE QUE PARA EL AÑO 2050 HAYA POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD MÁS ANCIANOS QUE NIÑOS, DERIVADO DE LO ANTERIOR, EN RELACIÓN CON CIFRAS DE EMPLEO PARA LOS ADULTOS MAYORES, SE TIENE EL SIGUIENTE PARÁMETRO: EN 2010 SE VERIFICÓ LA ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE), Y ARROJÓ QUE MÁS DE 82,000 ADULTOS MAYORES ESTABAN EN BUSCA DE UNA VACANTE PARA EMPLEARSE, A LA CIFRA DADA CON ANTERIORIDAD, DEBE SER SUMADO QUE 1,113,882 PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CORRESPONDEN A LA POBLACIÓN NO ECONÓMICAMENTE ACTIVA POSIBLE, PERO QUE ACEPTARÍAN TRABAJAR AUNQUE NO LO SOLICITAN DE MANERA EXPRESA. LO QUE LLEVA A CONCLUIR QUE EL SECTOR PRODUCTIVO (LAS EMPRESAS) DEBEN CREAR UN TOTAL DE 1,196,082 FUENTES DE EMPLEO EXCLUSIVAS PARA ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN, SI BIEN, LOS DATOS DUROS QUE ARROJAN LAS CIFRAS QUE ACABAN DE SER MENCIONADAS, ALERTAN AL SECTOR EMPRESARIAL, PORQUE SE SABE DE LA DIFÍCIL SITUACIÓN POR LA QUE TAMBIÉN ESTE SECTOR ATRAVIESA EN EL PAÍS, A LO QUE EL ESTADO DE DURANGO NO ES PRIVATIVO, SIN EMBARGO HABRÁ QUE INICIAR POR EJERCER ACCIONES PEQUEÑAS, TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES, QUE PERMITAN EL IR, EN POCO, GENERANDO ESPACIOS LABORALES PARA LOS ADULTOS MAYORES, Y ASÍ NO SÓLO EMPODERAR AL



ADULTO MAYOR, SI NO QUE SE RESUELVAN DE FONDO SUS NECESIDADES ECONÓMICAS, AL SER ABSORBIDAS POR ELLOS MISMOS CON EL PRODUCTO DE SU PROPIO TRABAJO, LAS BASES SOBRE LAS CUALES SE DEBE TRABAJAR, PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS DE EMPLEO PARA LOS ADULTOS MAYORES, SON LAS SIGUIENTES: EL INAPAM (INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, NOMBRE QUE ADQUIRIÓ DICHO INSTITUTO A PARTIR DE 2002, A RAÍZ DE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PUBLICADA EL 25 DE JUNIO DE 2002, ACTUALMENTE EL INAPAM, TIENE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES EL PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES, BRINDÁNDOLES EMPLEO, OCUPACIÓN, RETRIBUCIONES, ASISTENCIA Y LAS OPORTUNIDADES NECESARIAS PARA ALCANZAR NIVELES DE BIENESTAR Y ALTA CALIDAD DE VIDA, REDUCIENDO LAS DESIGUALDADES EXTREMAS Y LAS INEQUIDADES DE GÉNERO, A TRAVÉS DE ÉSTE INSTITUTO, SE OPERA, ADEMÁS, UN PROGRAMA DE EMPLEO PARA ADULTOS MAYORES QUE BUSCA PROMOVER FUENTES DE EMPLEO EXCLUSIVAS PARA MAYORES DE 60 AÑOS, EN CONCORDANCIA CON LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE EN SU ARTÍCULO 5 INCISO V, SEÑALA EL DERECHO AL TRABAJO DE ÉSTAS PERSONAS, ADEMÁS, CABE HACER MENCIÓN DE LA PREOCUPACIÓN DEL GOBIERNO DENTRO DE SUS PLANES NACIONALES DE DESARROLLO, DE INCLUIR EL TEMA DEL ADULTO MAYOR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS, LAS ACCIONES MENCIONADAS CON ANTERIORIDAD, HAN SIDO VIGILADAS Y ANALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL U ÓRGANOS DE EVALUACIÓN COMO EL CASO DEL CONSEJO NACIONAL



DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL). EN EL PERIODO 2009-2010 SE ANALIZÓ EL PROGRAMA 70 Y MÁS PARA CONOCER SI LAS ACCIONES REALIZADAS CUMPLEN CON LOS OBJETIVOS SOCIALES QUE SE PROPUSO, LO QUE GENERÓ MEJORAS SOCIALES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, ASÍ COMO MAYOR TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DE IGUAL FORMA, EL OBSERVATORIO DE POLÍTICA SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS DIFUNDIÓ QUE EN MÉXICO: 25% DE LOS ADULTOS MAYORES CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA ENFRENTAR SU VEJEZ, 75% ES VULNERABLE ECONÓMICAMENTE, 1.5 MILLONES RECIBEN ALGUNA PENSIÓN, EL RESTANTE 80% TIENE QUE BUSCAR ALTERNATIVAS PARA OBTENER INGRESOS, EL SUELDO PROMEDIO DE QUIENES TRABAJAN VARÍA ENTRE 3,000 Y 5,000 PESOS MENSUALES.¹⁹ POR OTRA PARTE, MÁS DEL 50% DE LA POBLACIÓN DE EDAD AVANZADA CUENTA CON UN TRABAJO POR CUENTA PROPIA, POR LO QUE PUEDEN INTEGRARSE AL MERCADO DE TRABAJO, PERO CON CONDICIONES LABORALES DEFICIENTES, PUES ES A LO QUE SE LE CONOCE COMO LA INFORMALIDAD LABORAL DEL ADULTO MAYOR, TEMA QUE CONSTITUYE UN GRAN RETO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, EN LO QUE ENFATIZO, SE DEBE TRABAJAR, DE GENERARSE FUENTES DE EMPLEO PARA EL ADULTO MAYOR, SE PERMITIRÍA QUE ASÍ, LOS PROGRAMAS SOCIALES, SE DIRIJAN, A UN NÚMERO INFERIOR DE PERSONAS MAYORES, QUE DE ACUERDO A SUS CONDICIONES FÍSICAS Y DE ESTADO DE SALUD, DEFINITIVAMENTE LES PRIVARÁ EL INCORPORARSE AL SECTOR LABORAL, DICHO LO ANTERIOR, EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN DENTRO DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ADULTO MAYOR, EN EL QUE HAY TAREA POR REALIZAR, POR OTRO LADO, ES NECESARIO QUE AL



INTERIOR DE LAS FAMILIAS, SEA REFORZADO EL ESPÍRITU DE AYUDA, Y CONSTRUIR UN NÚCLEO SÓLIDO, EN EL QUE SE PERMITA NO DEJAR EN PLENO DESAMPARO A LOS ADULTOS MAYORES, PUES ES COMÚN, DESAFORTUNADAMENTE HOY DÍA, CONOCER DE CASOS DE ABANDONO DE PERSONAS MAYORES, POR SU PROPIA FAMILIA, ES DE SUMA IMPORTANCIA, QUE SEA AL INTERIOR DE LAS FAMILIAS, EN DONDE SE BUSQUE EL LOGRO DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS Y NECESARIAS, A FIN DE QUE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, ALCANCEN ÓPTIMOS GRADOS DE AUTONOMÍA, INDEPENDENCIA, Y POR ENDE, DE BIENESTAR, CONDICIONES, QUE LES AYUDARAN A SEGUIR PARTICIPANDO EN FORMA ACTIVA DENTRO LA SOCIEDAD, AYUDADO POR LOS PROPIOS MIEMBROS DE SU FAMILIA, LO ANTERIOR, SE LOGRA, PRIMERO, CUANDO LA FAMILIA SE ENCUENTRA COHESIONADA, DISPUESTA A INFORMARSE RESPECTO A TODOS LOS APOYOS E INSTANCIAS A LAS QUE PUEDE ACUDIR A FIN DE CONSEGUIR APOYO Y ASESORÍA DE PROGRAMAS A LOS QUE PUEDE ACCEDER SU FAMILIAR EN CONDICIONES DE ENCONTRARSE EN EDAD DE 60 AÑOS O MÁS, ÉSTE TEMA, ES DE CONJUGACIÓN DE ESFUERZOS, NO SE PUEDE DEJAR TODO DEL LADO DEL GOBIERNO, DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN CUALQUIERA DE SUS ORDENES DE GOBIERNO, TAMPOCO SE PUEDE DEJAR EN SOLO LAS MANOS DEL PODER LEGISLATIVO, SI NO QUE SE REQUIERE DE ESFUERZOS DE LA SOCIEDAD, DE LAS FAMILIAS, DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, DEL SECTOR PRODUCTIVO, DE LOS GOBIERNOS Y DE CADA UNO DE QUIENES TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE VELAR POR LOS INTERESES DE LOS SECTORES VULNERABLES, SEAMOS ACTORES DE NUESTROS DESTINOS, BUSCANDO LA MEJORA PARA TODOS Y CADA DE LOS MIEMBROS DE



H. Congreso del Estado
de Durango

LXVI LEGISLATURA 2013-2016

86

OFICIALÍA MAYOR
PROCESO LEGISLATIVO
SESIÓN ORDINARIA
DE LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
03 DE MAYO DE 2016
(10:00) HORAS

NUESTRAS FAMILIAS, DIGAMOS NO AL DESAMPARO DEL ADULTO MAYOR, NO A SU RELEGACIÓN, SI A UNA VIDA DIGNA PARA ELLOS, SI A SU INCLUSIÓN LABORAL, POR EL DESARROLLO DEL PAÍS, POR EL CRECIMIENTO DE NUESTRO ESTADO DE DURANGO, POR SU ATENCIÓN, GRACIAS.

PRESIDENTE: SIENDO LAS (12:38) DOCE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA DE HOY; HABIÉNDOSE AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CLAUSURA LA SESIÓN Y SE CITA AL PLENO A SESIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DE HOY MARTES (3) TRES DE MAYO DEL 2016 A LAS (13:10) TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DAMOS FE:-----

**DIP. LUIS FERNANDO SOTO JACQUEZ
PRESIDENTE**

**DIP. ALICIA GARCÍA VALENZUELA
SECRETARIA**

**DIP. PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO
SECRETARIO**